



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO



TESIS:

Sobrecriminalización en el delito de violencia agravada a la autoridad y la necesidad de aplicación del principio de ultima ratio y proporcionalidad

Autora:

Bach. Alfaro Yamunaque Gloria Mercedes

Asesor:

Mag. Vargas Rodríguez Cesar

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADA

25 de agosto del 2023

Lambayeque, 2023

Tesis denominada “Sobrecriminalización en el delito de violencia agravada a la autoridad y la necesidad de aplicación del principio de ultima ratio y proporcionalidad” presentada para optar el TITULO PROFESIONAL DE ABOGADA, por:

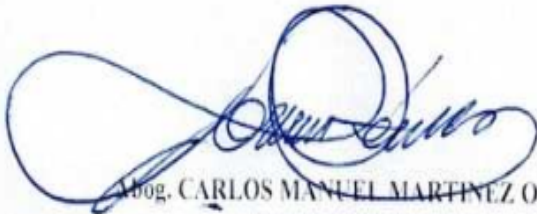


.....
Bach. Alfaro Yamunaque Gloria Mercedes
Autora



Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ
Asesor

APROBADO POR:



Abog. CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS
Presidente del Jurado



Mag. CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE
BARRENECHEA
Secretario del Jurado



Abog. JOSE ELOY CAMONAL GUEVARA
Vocal del Jurado.

DEDICATORIA

Esta tesis está dedicada a:

A mis padres, quienes con su amor y esfuerzo han contribuido con mi formación profesional, permitiéndome cumplir hoy un sueño más, por inculcar en mí el amor a Dios, el esfuerzo y la perseverancia para afrontar las adversidades.

A mis hermanos Juana, Dalesca y José, por su apoyo incondicional durante el desarrollo de este proceso, acompañándome siempre en la realización de mis sueños y metas.

A mi tío Alberto, quién desde muy pequeña me alentó siempre para seguir esta hermosa profesión de abogada, enseñándome siempre el respeto y la lealtad por nuestras convicciones.

A mis abuelos maternos por todas y cada una de sus oraciones, sus consejos y palabras de aliento que día a día hacen de mí una mejor persona.

AGRADECIMIENTO

En primer lugar, agradezco a Dios, quien con su infinito amor y bondad me permite hoy estar cumpliendo uno de mis principales objetivos profesionales, quien me llena de bendiciones siempre, pero sobre todo por estar presente en mi familia cuidándonos.

A mis padres, por su apoyo incondicional en el desarrollo de mi formación profesional, por impulsarme a seguir siempre en el cumplimiento de mis metas trazadas y no dejarme vencer por las adversidades, pero sobre todo por mantener mi fe puesta en Dios.

Asimismo, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Dr. Cesar Vargas Rodríguez, por haber aceptado ser mi asesor en el desarrollo de este trabajo, agradeciendo su paciencia, enseñanza y colaboración que permitió el desarrollo de este proyecto de investigación.



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA
UNIDAD DE INVESTIGACION



ACTA DE SUSTENTACIÓN

A C T A DE SUSTENTACIÓN PRESENCIAL N° 40-2023-UI-FDCP

Sustentación para optar el Título de ABOGADA de: **Gloria Mercedes Alfaro Yamunaque**.
Siendo las 11:00 a.m. del día viernes 25 de agosto del 2023 se reunieron en la Sala de sustentaciones de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo", los miembros del jurado evaluador de la tesis titulada: "**SOBRECRIMINALIZACIÓN EN EL DELITO DE VIOLENCIA AGRAVADA A LA AUTORIDAD Y LA NECESIDAD DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE ULTIMA RATIO Y PROPORCIONALIDAD**", designados por Resolución N° 29-2022-FDCP-VIRTUAL de fecha 22 de febrero del 2022, con la finalidad Evaluar y Calificar la sustentación de la tesis antes mencionada, por parte de los Señores Catedráticos:

PRESIDENTE : Abog. CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS.

SECRETARIO : Mag. CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA.

VOCAL : Abog. JOSE ELOY GAMONAL GUEVARA

La tesis fue asesorada por Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ, nombrada por Resolución N°29-2022-FDCP-VIRTUAL de fecha 22 de febrero del 2022.

El acto de sustentación fue autorizado por Resolución N°390-2023-FDCP-VIRTUAL de fecha 22 de agosto del 2023.

La tesis fue presentada y sustentada por la bachiller **Gloria Mercedes Alfaro Yamunaque** y tuvo una duración de 30 minutos. Después de la sustentación y absueltas las preguntas y observaciones de los miembros del jurado; se procedió a la calificación respectiva, obteniendo el siguiente resultado: APROBADA con la nota de 15 (QUINCE) en la escala vigesimal, mención de REGULAR.

Por lo que queda APTA para obtener el Título Profesional de ABOGADA, de acuerdo con la Ley Universitaria 30220 y la normatividad vigente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Siendo las 12:05 p.m., del mismo día, se da por concluido el acto académico tomando la juramentación respectiva y suscribiendo el Acta los miembros del jurado.

Lambayeque, viernes 25 de agosto del 2023

Abog. CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS
Presidente del Jurado

Mag. CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE
BARRENECHEA
Secretario del Jurado

Abog. JOSE ELOY GAMONAL GUEVARA
Vocal del Jurado.

Certificación: El Director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, certifica la veracidad del contenido del Acta de sustentación de tesis presencial N° 40-2023-UI-FDCP correspondiente a Gloria Mercedes Alfaro Yamunaque, evento que se ha realizado de manera presencial el día viernes 25 de agosto del 2023 y aparece registrada en el archivo correspondiente.

Lambayeque, 03 de noviembre del 2023

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA

Dr. Rafael Hernández Canelo
Director De La Unidad De Investigación

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS

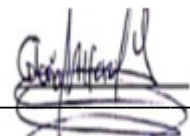
Yo, Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ, Docente/ Asesor de tesis/ Revisor del trabajo de investigación de la bachiller en DERECHO Gloria Mercedes Alfaro Yamunaque, Titulada SOBRECriminalización en el delito de violencia agravada a la autoridad y la necesidad de aplicación del principio de ultima ratio y proporcionalidad, luego de la revisión exhaustiva del documento constato que la misma tiene un índice de similitud de 19% verificable en el reporte de similitud del programa Turnitin.

El suscrito analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Lambayeque, 18 de abril del 2023



Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ
D.N.I. 18484422
ASESOR



Bach. Gloria Mercedes Alfaro Yamunaque
DNI: 46445190
Autor

AGRAVADA A LA AUTORIDAD Y LA NECESIDAD DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE ULTIMA RATIO Y PROPORCIONALIDAD

INFORME DE ORIGINALIDAD

19%

INDICE DE SIMILITUD

18%

FUENTES DE INTERNET

2%

PUBLICACIONES

8%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1

repositorio.ucv.edu.pe

Fuente de Internet

4%

2

hdl.handle.net

Fuente de Internet

4%

3

repositorio.uss.edu.pe

Fuente de Internet

3%

4

Submitted to Universidad Señor de Sipan

Trabajo del estudiante

2%

5

Submitted to Universidad Cesar Vallejo

Trabajo del estudiante

1%

6

idoc.pub

Fuente de Internet

1%

7

repositorio.unprg.edu.pe

Fuente de Internet

1%

8

repositorio.usanpedro.edu.pe

Fuente de Internet

1%

9

qdoc.tips

Fuente de Internet


Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ
D.N.I. 18484422
ASESOR




Recibo digital


Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por **Turnitin**. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega: Gloria Mercedes Alfaro Yamunaque
Título del ejercicio: REVISION DE TESIS
Título de la entrega: AGRAVADA A LA AUTORIDAD Y LA NECESIDAD DE APLICACIÓ...
Nombre del archivo: PROYECTO_FINAL_DE_TESIS_LISTO.docx
Tamaño del archivo: 334.29K
Total páginas: 84
Total de palabras: 14,922
Total de caracteres: 81,017
Fecha de entrega: 17-abr.-2023 09:48a. m. (UTC-0500)
Identificador de la entre... 2067265410



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS



TESIS

SOBRECRIMINALIZACIÓN EN EL DELITO DE VIOLENCIA
AGRAVADA A LA AUTORIDAD Y LA NECESIDAD DE
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE ULTIMA RATIO Y
PROPORCIONALIDAD

ASESOR:

Cesar Vargas Rodríguez

PRESENTADO POR:

Bach. Gloria Mercedes Alfaro Yamunaque

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

LAMBAYEQUE, 2023

1



Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ
D.N.I. 18484422
ASESOR

ÍNDICE

DEDICATORIA.....	3
AGRADECIMIENTO.....	4
RESUMEN	7
ABSTRACT	8
INTRODUCCION	9
I. ASPECTOS METODOLOGICOS	12
1. Realidad problemática	12
1.1. Formulación del problema	19
1.2. Justificación e importancia del estudio.	19
1.2.1. Importancia del estudio	20
1.3. Objetivos.	20
1.3.1. Objetivo General.	20
1.3.2. Objetivos Específicos.	21
1.4. Hipótesis.....	21
1.5. Variables.	21
1.5.1. Variable independiente.....	21
1.5.2. Variable dependiente	21
1.6. Operacionalización	22
1.7. Diseño de contrastación de hipótesis.	23
1.8. Población y muestra	23
1.9. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	23
1.9.1. Métodos	23
1.9.2. Técnicas.....	24
1.9.3. Instrumentos.	24
1.9.4. Análisis estadísticos de los datos.....	24
CAPITULO II	26

MARCO CONCEPTUAL.....	26
2. MARCO CONCEPTUAL	27
2.1. Antecedentes del problema	27
2.2. Base teórica.....	30
2.2.1. Delito de desobediencia y resistencia a la autoridad.....	30
2.2.2. Aspectos críticos del delito de violencia y resistencia a la autoridad...	33
2.2.3. El principio de ultima ratio como criterio para formular una política criminal del delito de violencia agravada a la autoridad en el Perú	39
2.2.4. El principio de autoridad democrático	43
2.2.5. La interpretación de la ley penal: principio de proporcionalidad	44
2.2.6. El bien jurídico protegido.....	50
2.2.7. Definición de términos.....	56
CAPÍTULO III: ANALISIS Y RESULTADOS.....	57
3.1. Análisis de los resultados	58
CAPITULO IV: CONTRASTACIÓN DE LA HIPOTEIS	68
CAPITULO IV: CONCLUSIONES	74
CONCLUSIONES.....	75
CAPITULO VI: RECOMENDACIONES	76
RECOMENDACIONES	77
REFERENCIAS.....	78
ANEXOS	83

RESUMEN

La presente investigación conlleva como título Sobrecriminalización en el delito de violencia agravada a la autoridad y la necesidad de aplicación del principio de ultima ratio y proporcionalidad, ante ello se ha establecido como problema ¿Es necesario aplicar el principio de ultima ratio y proporcionalidad en la sobre criminalización del delito de violencia agravada a la autoridad?; como mecanismo de solución se tiene al objetivo general el cual busca Analizar la sobrecriminalización en el delito de violencia agravada a la autoridad y la necesidad de aplicación del principio de ultima ratio y proporcionalidad; Así mismo la investigación ha sido desarrollada con una metodología no experimental, con una muestra de 50 participantes que permitieron a través de sus conocimientos recopilar distintos conocimientos a favor de la tesis, es por ello que se logró concluir que A través del análisis realizado ante la sobrecriminalización en el delito de violencia agravada a la autoridad, se logró corroborar la necesidad de una correcta de aplicación del principio de última ratio y proporcionalidad, ya que a través de estos principios se logró determinar una eficacia jurídica obtenido beneficios no solo para la persona procesada sino que favorecerá al mismo estado alevitar que se incremente la carga procesal que hoy en día se evidencia en las entidades públicas.

Palabras claves: Ultima ratio, Proporcionalidad y Sobrecriminalización

ABSTRACT

The present investigation carries as a title Overcriminalization in the crime of violence aggravated to the authority and the need to apply the principle of ultima ratio and proportionality, in view of this it has been established as a problem Is it necessary to apply the principle of ultima ratio and proportionality in the criminalization of the crime of aggravated violence against the authority?; As a solution mechanism, the general objective is to analyze the overcriminalization in the crime of aggravated violence against the authority and the need to apply the principle of ultima ratio and proportionality; Likewise, the research has been developed with a non- experimental methodology, with a sample of 50 participants who allowed, through their knowledge, to collect different knowledge in favor of the thesis, which is why it was possible to conclude that Through the analysis carried out before the overcriminalization in the crime of aggravated violence against the authority, it was possible to corroborate the need for a correct application of the principle of ultima ratio and proportionality, since through these principles it was possible to determine a legal effectiveness obtained benefits not only for the processed person but it will favor the state itself by preventing the increase in the procedural burden that is evident today in public entities

Keywords: Ultima Ratio, Proportionality and Overcriminalization

INTRODUCCIÓN

La presente investigación se encuentra relacionada a la existente sobrecriminalización de los actos de violencia agravada y la falta de aplicación de última ratio, ya que es evidente que el estado peruano es una sociedad atrasada y de cultura fuertemente autoritaria y despótica como la nuestra, así como la de otros países de América Latina con los cuales el Perú tiene un pasado común de casi tres siglos de historia en los dominios del Imperio español, resultaba inevitable que el principio de autoridad tuviese sus manifestaciones, es por ello que a través de los siguientes capítulos abordaremos distintos temas a favor de la investigación.

El capítulo primero hace referencia a los aspectos metodológicos, el cual abarca la realidad problema desde el ámbito internacional hasta el local, así mismo hace mención a la formulación del problema y el porque es justificable la investigación, cabe señalar que también se toma en cuenta los distintos objetivos planteados y sus respectivas variables, seguidamente hacen mención los instrumentos, métodos y herramientas que se han utilizados para el desarrollo, cabe señalar que también están incluidos las personas que irán a participar en la investigación.

El segundo capítulo abarca a todo el marco conceptual, el cual incluye los antecedentes de estudios desde un ámbito internacional hasta local, de igual manera toma en cuenta las bases teóricas a desarrollar como la naturaleza jurídica del sistema penitenciario, la prisión preventiva, el hacinamiento penitenciario y entre otros aspectos fundamentales.

El tercer capítulo hace referencia al análisis de los resultados, los cuales han sido obtenidos a través de la encuesta aplicada y de los conocimientos expresado por los participantes, una vez obtenidos estos conocimientos se procedieron a tabularlos para su respectiva interpretación, el cual permitió establecer la viabilidad de la investigación.

El capítulo cuarto abarca la contratación de la hipótesis, el cual es el procedimiento que hace referencia a la interpretación de los resultados con los antecedentes establecidos capítulos anteriores, esto conlleva a contrastar los resultados obtenidos y determinar la viabilidad de la información que se han recopilado.

El quinto capítulo hace referencia a las conclusiones de la investigación, cabe resaltar que deberán estar acorde o respaldar la viabilidad de los objetivos planteados, para que de esta manera se pueda cumplir con las expectativas determinadas y por último se tiene al capítulo seis, el cual abarca todas recomendaciones favorables tanto para el mismo estado y los posibles lectores.

CAPITULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS

I. ASPECTOS METODOLÓGICOS.

1. Realidad problemática.

Todos los días los medios de comunicación hablan de quienes atacan o abusan de las autoridades u obstruyen el cumplimiento de las normas establecidas. Escenas como esta llevan a la negación, condena y confusión inmediata en la opinión pública, porque crea polémica, porque para muchas personas esta política de criminal no es suficiente para poner orden y hacer cumplir la ley. Un grupo más pequeño, particularmente en derechos humanos, derecho constitucional y penal, analiza este populismo criminal y las políticas que socavan los principios de proporcionalidad y finalidad.

Es así que Chuaqui (2016), comprende que:

Para poder comprender la aplicabilidad del principio de ultima ratio, primero se toma en consideración que el origen del principio de autoridad se remonta al Estado romano, en el que inicialmente la auctoritas fue un atributo del saber socialmente reconocido y que actuaba como un límite a las protestas. Primigeniamente, la auctoritas era entendida como poder socialmente reconocido, para luego entenderse como poder de mando de los magistrados. Entonces, las conductas de atentado eran consideradas como un ataque a esta facultad. A la autoridades se sumaba la dignitas que implicaba la idea de una superioridad política y moral del magistrado romano.

Finalmente, durante el siglo XIX las diversas formulaciones de los juristas españoles acerca del objeto jurídico protegido en los delitos de atentado se remitieron al principio de autoridad. Estos argumentos se realizan mostrando el concepto de obediencia a los responsables del orden social, lo que refuerza este concepto con sus conexiones más autorizadas. Es así que de acuerdo a lo que menciona Carretero (2006), se tiene que: El contenido de esta regulación justificaba los excesos y arbitrariedades de la autoridad, pues planteaba con claridad que el orden social implica obediencia y subordinación a las autoridades, a pesar de que cometan excesos o tropelías contra los particulares.

Este controvertido escenario es ideal para abordar el problema que se presenta con frecuencia en los procesos procesales, penales y judiciales, donde actos y hechos que no deben ser sancionados dan lugar a imputación penal. Muchos profesionales del derecho, especialmente jueces y fiscales, siguen de cerca un patrón del derecho penal moderno: sobrecarga el sistema judicial, poniendo como fin último la eficiencia, el racionalismo y el principio de justicia penal;

Los resultados presentados en este cuadro comprenden el uso y aplicación del principio de ultima ratio, esto podrá ser posible a través del análisis de casos concretos para formular propuestas y alternativas que permitan al operador del derecho enfrentar el uso y abuso de la ley penal. Creemos que el derecho penal es una ley de último recurso y que los jueces y fiscales deben implementar los mecanismos pertinentes para minimizar las sanciones.

Mostrar falta de respeto a la autoridad cuando una persona se encuentra en una determinada situación no solo es vergonzoso sino que también tiene un efecto negativo en la opinión pública y se sabe que los hechos presentados frente a las cámaras están inflados y exagerados con consecuencias, más allá de todas las barreras geográficas, culturales, sociales y legales. Esta influencia de los medios de comunicación ha dado lugar en los últimos años a sanciones más estrictas para quienes se dediquen a este tipo de actividades. Es así que países como México, Argentina, Chile, Colombia y Venezuela cuentan con legislación que castiga a las personas que faltan a la autoridad.

Con respecto a García (2019), se tiene que:

En España advierten la necesidad de revisar la legislación correspondiente a fin de reconducirla por la razonabilidad, la proporcionalidad y lo que sea menos gravosa para los afectados, si bien de manera restringida y según la gravedad de la amenaza. Incluso hasta el propio Tribunal Constitucional ha intervenido con el propósito de revisar la constitucionalidad del contenido de las normativas.

Así mismo Carnevali (2008), comprende que:

Si bien no cabe duda de que el principio de última ratio representa un severo límite al poder punitivo del Estado en Chile, resulta problemático, sobre todo considerando los criterios que asigna a su contenido sustantivo. El principio subyacente es político, ya que la decisión de cometer una actividad delictiva es legislativa. Para ello,

examinaremos algunos de los principios que legitiman la pena y las nuevas tendencias político-criminales, entre ellos el papel que puede jugar el tribunal constitucional y la propuesta metodológica del análisis económico jurídico como medida de eficiencia (p. 13)

Cabe señalar anteriormente que el derecho comparado se relaciona con las políticas penales en la comprensión y aplicación del estado constitucional de derecho. Las leyes de Chile, México y Colombia no prevén penas o sanciones agravadas si una persona desobedece a la autoridad. Esto significa que las políticas criminales de estos países se acercan más a los principios de proporcionalidad y ultima ratio del derecho penal.

En este caso, las sanciones pueden continuar para quienes no respeten la autoridad. Sin embargo, el debido proceso debe ser congruente con los principios, garantías y valores de la ley a fin de evitar sanciones sustanciales o extensivas que con el tiempo menoscaben los derechos fundamentales, en especial la libertad, la integridad y el proyecto de vida.

En una sociedad atrasada y de cultura fuertemente autoritaria y despótica como la nuestra, así como la de otros países de América Latina con los cuales el Perú tiene un pasado común de casi tres siglos de historia en los dominios del Imperio español, resultaba inevitable que el principio de autoridad tuviese sus manifestaciones.

Ello pese a que el legislador peruano, tanto en el Código Penal de 1924 como en el de 1991, No siguió el modelo de atentado español porque la normalidad de la imagen dependía de la descripción dada en los delitos

de sublevación y sublevación. En consecuencia, el autor la de Rojas (2007), sostiene que: Bajo el pretexto del principio de autoridad y respeto a las jerarquías no se puede aceptar un avasallamiento al hombre común que sufre y soporta los frecuentes atropellos de los órganos del Estado.

Con o sin pandemia, se determina que algunas personas, por diversos motivos, se ven envueltas en enfrentamientos o conflictos con alguna autoridad, generalmente la policía. Estas acciones se pueden grabar fácilmente con la cámara de un celular y se muestran en los tribunales por defensa propia, violencia y resistencia a las autoridades. Como Lima es una ciudad grande con un alto volumen de tráfico entre personas y policías en la vía pública, no son pocos los casos de colisiones.

De hecho, la policía a menudo usa fuerza y materiales defensivos y represivos en un esfuerzo por proteger a las personas de lo que perciben como un abuso de poder cuando son amenazadas. Por su lado Cuerda (2003), comprende que:

Los agentes de policía están aumentando la intensidad y el uso de la fuerza para evitar que sean desautorizados. En estas circunstancias se pierde la delgada línea entre un delito, pues para el intervencionista la actuación policial constituye un abuso de poder, y para el policía, la actuación del individuo constituye un delito de violencia o resistencia a la autoridad.

Ante este problema se requiere aplicar el principio de ultima ratio con la finalidad de poder mejorar la sobre criminalización en delitos de violencia y resistencia a la autoridad en tiempos de pandemia, ya que en el

principio de ultima ratio es uno de los principales límites al poder punitivo del Estado.

Finalmente, creemos que el desarrollo de la política penal para los delitos violentos agravados debe partir del entendimiento de que el derecho penal no solo es racional sino también proporcionado y prudente, lo que significa que debe intervenir solo cuando sea necesario. En definitiva, no podemos vivir sin herramientas para medir la efectividad: cómo prevenir el crimen con el menor costo social. El principio de compromiso final también debe considerar la eficiencia.

Tal como menciona Peña Cabrera (2020), menciona que:

Se debe tener en cuenta que nuestra sociedad está necesitada de respuestas judiciales rápidas y efectivas en el ámbito penal, por lo que hoy en día es un deber inexcusable del sistema punitivo protegernos de la inseguridad ciudadana que padece nuestro país.

Los delitos de robos, secuestros, asesinatos, sicariato, y entre otros, son permanente en todo el país son constante y avergüenza a todos los titulares de las redes sociales, creando ansiedad, miedo en la comunidad. Los actores políticos han aprovechado esta coyuntura para implantar toda una gama de políticas criminales con tendencia represiva, pues buscan ampliar la base criminal.

Esta tendencia legislativa ha estado vigente durante más de dos décadas, pero con ella, los hechos delictivos están destinados a constituir delitos graves en el umbral de la cadena perpetua. Desde esta perspectiva

reformista emergen los fundamentos de un conflicto penológico manifiesto, que involucra los principios de equidad, culpa, daño y jerarquía del derecho. No en vano, los delitos premeditados se han agregado a la lista de delitos penales, que es probable que se intensifiquen.

Ante ello Peña (2020), comprende que:

Los delitos de asesinato y homicidio involuntario conllevan penas menores que los delitos determinantes, que violan los derechos humanos fundamentales según la lista de valores de la Constitución. Esta situación presenta una cierta asimetría de las penas, ya que al núcleo de los delitos comunes se suman diversas agravantes que menoscaban el mandato determinativo. Un estilo de excesiva causticidad ha creado tradicionales uniones con dos tipos delictivos, como son el robo, el secuestro o el hurto, blanqueo de capitales entre otros (p. 243).

Ahora bien, en la actualidad se pudo apreciar que los mandatos normativos contenidos en los D. S. N 044-2020- PCM, 046-2020-PCM y otros, los cuales ordenan la inmovilización social obligatoria y el toque de queda en todo el territorio nacional, han sido abiertamente transgredidos.

Finalmente consideramos que el principio de autoridad implica una idea de jerarquía y una sobreprotección al funcionariado público, pues tiende a convertir a los que ocupan un cargo público en una suerte de élite

privilegiada, alejada del pueblo, cuando en realidad ellos deberían brindar los servicios y derechos que la Constitución Política contempla.

Por ello, consideramos que este principio es, más bien, un rezago de regímenes absolutistas como lo fueron las monarquías o los gobiernos dictatoriales, por lo que el bien jurídico protegido en el tipo penal de atentado o violencia contra la autoridad es la función pública ejercida de manera correcta y legítima para el bienestar de los ciudadanos a través de los servicios públicos.

1.1. Formulación del problema.

¿Es necesario aplicar el principio de ultima ratio y proporcionalidad en la sobre criminalización del delito de violencia agravada a la autoridad?

1.2. Justificación e importancia del estudio.

Una revisión de la política penal peruana en materia de delitos violentos agravados revela que la legislación nacional es inconsistente y que el derecho penal impone la aplicación del principio de última ratio.

Además, es claro a partir de un análisis de la práctica jurisdiccional que la criminalización excesiva del comportamiento ordinario ha creado una ventaja procesal, y que la presión de los medios sobre las decisiones de los jueces ha exacerbado el problema. Esto ha generado serios cuestionamientos a la práctica legislativa y jurisdiccional, ya que jueces y fiscales han manejado mal el delito, violando el principio de igualdad de penas y firmeza de la ley penal. El objetivo es señalar que la política criminal en esta doctrina es absurda y necesita ser seriamente examinada

y distinguida desde la perspectiva de los derechos humanos y el principio del ultima ratio.

1.2.1. Importancia del estudio.

Esta investigación es realizada debido que el principio de autoridad tiene innegables repercusiones en el Perú. Estas se reflejan tanto en las críticas como en las adherencias en el plano de la doctrina penal. Por otro lado, en el plano sociológico, hay operadores del populismo penal que levantan el principio de autoridad como estandarte de su activismo para sobre criminalizar conductas de resistencia en el marco de las intervenciones policiales en protestas sociales. De esta manera se impone un debate en el que los expertos en política criminal han sido puestos al margen y no se toleran matices o discrepancias. Además, ayudara a poder aplicar el principio de ultima ratio mejorara la sobre criminalización en delitos de violencia y resistencia a la autoridad entiempos de pandemia, teniendo en cuenta que los expertos coinciden en señalar que la política criminal sobre el delito de violencia agravada a la autoridad en el Perú asume una postura de prisionización y que el Estado peruano cuenta con una política criminal represora, al dejar que el juez aplique según su criterio la pena de cárcel a la persona que haya afectado la autoridad estatal. Ello se agrava cuando el sujeto pasivo es un efectivo policial, magistrado o militar.

1.3. Objetivos.

1.3.1. Objetivo General.

Analizar la sobrecriminalización en el delito de violencia agravada a la

autoridad y la necesidad de aplicación del principio de ultima ratio y proporcionalidad.

1.3.2. Objetivos Específicos.

1. Identificar si existe una sobrecriminalización en el delito de violencia agravada a la autoridad.
2. Analizar el principio de ultima ratio y proporcionalidad en el delito de violencia agravada a la autoridad
3. Describir bajo que situaciones se podría hacer uso de los principios de ultima ratio y proporcionalidad en el delito de violencia agravada a la autoridad.

1.4. Hipótesis.

Si se analiza la sobrecriminalización en el delito de violencia agravada a la autoridad, se puede determinar la necesidad de implementar y aplicar el principio de ultima ratio y proporcionalidad.

1.5. Variables.

1.5.1. Variable independiente.

Violencia agravada a la autoridad

1.5.2. Variable dependiente.

Principio de ultima ratio y proporcionalidad

1.6. Operacionalización

Variables	Dimensiones	Indicadores	Ítem / Instrumento
V. Independiente Violencia agravada a la autoridad	Servidor Publico Obstaculización de las funciones Código Penal	Violencia o amenaza Pena privativa de libertad Artículo 368	Escala de Likert Encuesta
V. Dependiente Principio de ultima ratio y proporcionalidad	Principio de proporcionalidad Principio de naturaleza constitucional Proteger determinados bienes jurídicos	Prohibición de exceso Principio de razonabilidad Principio jurídico	

1.7. Diseño de contrastación de hipótesis.

El diseño que realizaremos es No experimental transaccional – simple, esto se debe a que se analiza la realidad socio jurídica, tomando en cuenta la información recolectada a través del tiempo y del espacio.

1.8. Población y muestra.

Población: es una agrupación de personas que busca que la investigación tenga expertos que formen una especialidad en común como es el caso de los abogados especialistas en derecho Penal.

Muestra: se toma en cuenta una parte proporcional de la población es decir solo se aplicará a 50 informantes que sean especializados en Derecho Penal a los cuales se les dará una encuesta como instrumento de recolección de datos, basado en 10 preguntas las cuales van a ir en relación con la investigación.

1.9. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos.

1.9.1. Métodos.

Método deductivo: es una motivación que se basa de lo general a lo específico, particularmente se centra en los elementos del estudio de la investigación.

Método inductivo: va orientada de manera general al enunciado general, lo cual explica casos particulares de los datos y llega a sintetizar el problema de la investigación.

Método histórico: toma en cuenta investigaciones anteriores, determinando como nace el problema con el transcurrir del tiempo.

Método descriptivo: ayuda a poder tomar en cuenta la realidad del problema y como se presenta el objeto de estudio dentro de la investigación.

Método explicativo: de toda la información recopilada se explica a través de preguntas, las cuales van a ayudar a plantear la hipótesis y el diseño no experimental.

Método experimental: toma en cuenta todo lo descrito y lo explicado dentro de la investigación, esto comprende que se centra en el futuro y la comparación con la realidad actual.

1.9.2. Técnicas.

Encuesta. – es una técnica que consta en preguntas que van en relación al tema, esta encuesta será presentado a los especialistas en derecho penal, las cuales serán pertenecientes al distrito judicial de Chiclayo.

1.9.3. Instrumentos.

Cuestionario. – es un instrumento que se aplica para poder determinar la opinión de los expertos de acuerdo a lo expresado por los abogados especialistas en derecho penal, entre ello se tendrá un promedio de 10 preguntas.

1.9.4. Análisis estadísticos de los datos.

Información obtenida de los procesos de recopilación de datos y herramientas utilizadas anteriormente relacionadas con noticias o sociedades; Participarán en la investigación y la investigación

como información relevante que contradice estos supuestos. Los datos recopilados estarán sujetos a un mínimo de presión, que se presentará en forma de tablas, gráficos y consultas

CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL

2. MARCO CONCEPTUAL

2.1. Antecedentes del problema.

Correa (2019), en su investigación, titulada: “Estudio Crítico de los delitos de Desobediencia, Ataque o Resistencia y Rebelión previstos en el COIP frente al Derecho de Resistencia”, expresa:

Diversos criterios que permite poder delimitar los delitos conocidos como desobediencia o resistencia y rebelión previstos dentro del derecho a la resistencia, tesis para optar el título profesional de magister en derecho penal de la Universidad de Cuenca, en donde se establece que dentro de la legislación ecuatoriana una resistencia a la autoridad de manera gradual, es decir que esta se va delimitar proporcionalmente para poder corregir la violencia que se ha ejecutado y llegar a asegurar la efectividad que tiene que tener el Estado, así mismo utilizar el pero penal para poder criminalizar la protesta social, por lo que se requiere una fuerza eficaz ante la legitimidad de política.

Hernández (2018), en su investigación titulada, “Reforma al principio de oportunidad en base al principio de mínima intervención penal”, requiere:

Aplicar una reforma al principio de oportunidad en función al principio de la mínima intervención penal, esta investigación ha sido presentada para poder obtener el título profesional de abogado de la Universidad Central del Ecuador, en donde interpreta a través de su conclusión que desde el principio de mínima intervención es posible resumir de la proporcionalidad final y la violación de la ley penal, que

en general representan una garantía de limitación del estado lus Puniendi, que justifica la intervención de este estado, no solo cuando sea necesario, sino para mantener su institución política en un sistema democrático.

Pariona (2017), en su investigación “Violencia y resistencia contra la autoridad”, analiza sobre:

La violencia y la resistencia que se ejerce en contra de la autoridad, esta investigación perteneciente a la revista Aequitas de la Universidad Nacional Mayor de San Mayor, concluye que el Estado es la entidad que llega a garantizar las tareas constitucionales de las autoridades a través de una función legal y legítima, delimitando que para ello la pena tiene que ser proporcional conforme lo contempla el código, sin embargo se establece en el código penal para para poder tener una mejor criminalización en los delitos de violencia a la autoridad, se implemente el principio de ultima ratio y el principio de proporcionalidad penal.

Bedón (2018), en su investigación titulada: “Aplicación del principio de proporcionalidad y razonabilidad en la determinación de la pena en el delito de violencia y resistencia a la autoridad policial, en los juzgados penales unipersonales de la provincia de Huaraz, periodo 2017 – 2018”, expresa:

Aplicar principios constitucionales como la proporcionalidad y la razonabilidad, para poder determinar el delito de violencia y de resistencia a la autoridad policial, esta investigación ha sido para

realizada para obtener el título profesional de abogado de la Universidad San Pedro, en donde concluye que la aplicación de la penas dentro del régimen penal peruano no va conforme los términos del principio de ultima ratio, pues aplicando este principio se mejoraría la criminalización de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad en tiempos de pandemia, ejecutando un mejor derecho democrático y constitucional dentro del ordenamiento jurídico penal en función a valores como la justicia, libertad e igualdad.

Ruiz, (2020), en su investigación titulada, “La violencia y resistencia a la autoridad policial en la proporcionalidad de la pena en la ciudad de Chiclayo”, comprende:

La violencia y resistencia a la autoridad policial, frente a la proporcionalidad de la pena, esta investigación ha sido realizada para poder optar el título profesional de abogado de la Universidad Señor de Sipán, en donde se ha concluido que la violencia y la resistencia en la autoridad policial pueden influir mucho en la proporción de condena, porque la violencia y la resistencia pueden ser detectadas por el departamento de policía de Chiclayo y es realmente relevante. Si un policía, un miembro de las Fuerzas Armadas, un juez, un fiscal, un miembro de la Corte Constitucional o un gobierno de elección popular prescribe una acción penal, se le imputará una acción penal general, ilícita y penal.

Otiniano (2019), en su investigación titulada, “Propuesta de modificación para derogar el inciso 3 del artículo 367 del código penal peruano aplicando del principio de proporcionalidad para adecuar la sanción penal”, expresa:

Proponer una modificación que ayude aplicar el principio de proporcionalidad para adecuar la sanción penal, esta investigación ha sido desarrollada para optar el grado academia de maestro en derecho penal y procesal penal de la Universidad Señor de Sipán, concluyendo que como resultado del análisis de las sentencias, no existe una proporción de multas en nuestro sistema de justicia penal, ya que se ha demostrado que es más severa en los delitos de violencia y resistencia a la autoridad, además se sugiere que en la derogación del artículo anterior, el personal directamente calificado como el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Obras Públicas debe cumplir con los requisitos de elegibilidad.

2.2. Base teórica.

2.2.1. Delito de desobediencia y resistencia a la autoridad

De Toledo y Ubieto (1977), comprende que:

Durante el siglo XIX, España contó con los códigos penales de 1822, 1848, 1850 y 1870, donde, incluso hasta esa época, trascendió la concepción imperial romana de maiestas (soberanía), por lo que el delito de atentado a la autoridad se concibió como un ataque a las protestas (poder de mando del funcionario público) y a su dignitas o decoro. Al adoptar esta noción, el legislador penal español del siglo

XIX ubicó el delito de atentado en el capítulo dedicado a los delitos de lesa majestad (p. 115).

Así mismo López (1982), comprende que:

En la Constitución de Cádiz (1812) podemos encontrar el principio de autoridad, entendida como la inviolabilidad del rey y su autoridad. Su art. 170 extiende la autoridad real a todo cuanto conduce a la conservación del orden público en lo interior (pp. 207- 259).

Asimismo, en su discurso preliminar, se hace referencia a la necesidad de revestir al monarca de una autoridad verdaderamente poderosa.

De manera similar Iglesias, (2010), analiza que:

Los textos punitivos de 1928 y 1932 mantuvieron la rúbrica de Delitos contra el orden público, tal como figuraba en el catálogo de 1870. Posteriormente, durante el prolongado gobierno del general Francisco Franco, se promulgaron los códigos penales de 1944 y 1972, los cuales enmarcaron a los delitos de atentado dentro de los Delitos contra la seguridad interior del Estado. Con esta regulación se retornó a la rúbrica de los códigos de 1848 y 1850, que fueron aplicados en concordancia con la Ley de Orden Público de 1959 en el contexto de un férreo control sobre la población, que implicaba el acallamiento de cualquier tipo de protesta o disidencia. Durante este periodo dictatorial, el principio de autoridad fue asumido por la jurisprudencia bajo los criterios de jerarquía y de subordinación. Al respecto, el Tribunal Supremo, mediante la Sentencia N.º 5544, de

22 de diciembre de 1970, refuerza una concepción autoritaria al referirse a los ciudadanos o administrados bajo el concepto medioeval de subditus, que tiene como términos equivalentes a sometido, sumiso o sujeto inferior. (p. 392).

Con la entrada en vigencia de la Constitución española de 1978, el principio de autoridad entra en crisis y será puesto en cuestión, dado que no encuentra fundamento en dicho texto. Además, con la promulgación del Código Penal de 1995 se hizo retroceder al principio de autoridad al abolir la figura penal del desacato, que protegía un atributo personal como el honor del funcionario. Sin embargo, la erradicación completa del principio de autoridad se vio imposibilitada debido a la ubicación que sedio a los delitos de resistencia y atentado, los cuales serían clasificados dentro de los Delitos contra el orden público. De esta manera, dichos delitos retoman la ubicación que tenían en los códigos penales de 1870, 1928 y 1932. En suma, se pierde la oportunidad de desligarse de esa antigua estructura y de reubicar estos injustos en otro grupo de delitos, como los que protegen la administración pública, o de crearles otro título, a fin de ubicar los nuevos conceptos constitucionales.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo español ha ido apartándose progresivamente del principio de autoridad, y como hito de ese proceso de deslinde está la STS N.º 950, de 4 de junio del 2000. Esta resolución señala que el principio de autoridad se trata de un valor propio de un régimen autoritario y no resulta adecuado para una sociedad democrática, que tiene una jerarquía de valores distinta, donde se protege la actuación

de los agentes públicos bajo la premisa de que estos actúen en el ejercicio legítimo del cargo y para servir a los ciudadanos.

Así, ya sea vinculado a la seguridad interior o en otros momentos al orden público, el principio de autoridad se ha erigido durante más de dos siglos en un valor omnipresente y protegible en el derecho penal español, por lo tanto, se ha consolidado como tradición histórica de este; por contraparte, va a surgir, desde los tratadistas y desde la jurisprudencia, una tendencia a superar dichos conceptos y a proponer otros valores diferentes, tal como lo veremos en adelante

2.2.2. Aspectos críticos del delito de violencia y resistencia a la autoridad

Podemos evaluar la implementación de la ley de delitos violentos y resistencia a la autoridad en unos años. Desde un punto de vista dogmático y de política criminal, las principales contradicciones y problemas en la práctica pueden surgir más que soluciones.

Cabe resaltar que la tipificación del actual delito de violencia contra la autoridad se encuentra estipulado en el art. 366 del CP, el cual señala que:

El funcionario público o la persona que coadyuvare en las obligaciones legales o a petición de éste, impidieren o entorpeciere el legítimo ejercicio de sus funciones, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos o cuatro años o con servicio comunitario de ochenta a ciento cuarenta días.

Como puede ver, esta tipificación es altamente subjetiva, ya que toma en cuenta la interpretación del juez, fiscal, imputado y víctima para interpretar, identificar o determinar si la conducta de la persona es amenazante, violenta y si obstaculiza o interfiere en el ejercicio legítimo de las funciones de la víctima. También significa que los participantes pueden reflexionar sobre lo que dicen para asegurarse de que no refuercen opiniones, suposiciones o cuestiones subjetivas. La experiencia procesal y judicial demuestra que la clasificación es dudosa y compleja en su aplicación e interpretación.

Huancco (2016), comprende que:

Si bien no se modificaron las normas sobre delitos violentos contra la autoridad y agravantes, el juez señaló que no pretendía examinar la responsabilidad del infractor y la conducta de la víctima como una solución alternativa a los problemas de desigualdad de condenas, conducta policial y falta de arresto de los principales criminales (p. 75).

Por otra parte, la intervención de la autoridad debe ser legítima y en el ejercicio de sus funciones. En este sentido, no habrá delito de violencia contra la autoridad (arts. 365 y 366 del CP) a menos que la intervención policial ya siga los procedimientos legales por abuso de poder. La policía no tiene derecho a intervenir en los asuntos de un ciudadano que haya cometido un delito o un presunto delito sin las funciones correspondientes constitutivas del delito de usurpación de funciones.

Además, la interpretación de este tradicional dispositivo para el estudio teórico dogmático del artículo en el comentario no se limita al análisis de aquellos elementos que componen el tipo de delito. Esta actividad hermenéutica temprana es el comienzo y el primer paso importante en la interpretación. Sin embargo, Mendoza (2016), comprende que:

La estructura lingüística formal que conforma la forma penal tendrá racionalidad si cada uno de los elementos estándar es interpretado para un propósito valioso, esto es, para ser interpretado legalmente (disponibilidad de la ejecución de un acto legal, bajo la autoridad del funcionario).

Continuando con esta definición, es práctica común utilizar la intimidación o la violencia contra un funcionario público o persona que brinda asistencia letrada para entorpecer o impedir el desempeño de sus funciones.

En palabras de Mendoza (2016):

La acción se define por el uso uniforme de medios convencionales, siempre que esos medios cumplan con los requisitos del conocimiento. Debido a que el objeto funcional actúa para impedir la realización de una acción funcional, los medios utilizados debentener la capacidad suficiente para impedir o entorpecer la realización de esa acción funcional, incluso si el resultado no se produce materialmente.

Un delito de violencia se caracteriza por el uso directo o indirecto de la fuerza física contra un agente del Estado. Debe tener capacidad suficiente para contener o impedir el movimiento del poder. La violencia física ocurre cuando un funcionario del gobierno no puede, independientemente de su tamaño, nivel o situación actual, anular dicha fuerza a través de contramedidas. Por el contrario, si la violencia del sujeto activo es superada por las autoridades, no se cometerá el delito.

Entonces Mendoza (2016), analiza que:

El abuso físico debe cumplir con tres criterios: severo, sustancial y actual. Estás en una situación grave cuando no permites que se comprometan los intereses importantes del contribuyente y recuperar el bien jurídico lo antes posible.

El art. 366 del CP es una tipificación altamente subjetiva, pues implica la interpretación del juez, del fiscal, del propio acusado y de la víctima, quienes (cada uno) pueden interpretar, deducir o determinar si la acción de la persona les pareció intimidatoria o violenta y si impidió o trabó la ejecución de un acto propio del legítimo ejercicio de las funciones de la víctima.

Ante ello Mendoza (2016), analiza que:

La violencia es grave en el sentido de que el acto podría haberse evitado o prevenido razonablemente; lo que se considera es una alegación razonable de daño. Para evaluar la propiedad, la cantidad de intimidación o violencia utilizada por el operador activo es

comparable a la fuerza ejercida por el operador estatal. La violencia descontrolada de un borracho nunca puede compararse con el poder organizado y controlado de un funcionario público.

La situación actual supone que la violencia se produce cuando un funcionario público se encuentra en ejercicio de sus funciones y existe una amenaza de incumplimiento.

La severidad, intensidad y oportunidad del abuso deben poner en riesgo particular el mantenimiento de la actividad funcional. Para ello, deben ser compatibles con la prevención o inhibición del acto funcional, aunque no puedan prevenir o inhibir el acto funcional. De hecho, es suficiente para poner en peligro inminente la implementación del acto funcional. El problema surge cuando el fiscal y el juez deben evaluar si hubo oportunidad suficiente para prevenir la amenaza o violencia. Un punto de referencia es una actuación específica o un acto público.

Es aterrador verlo desde otro punto de vista ya que se basa en la amenaza de vulneración de derechos o intereses de los oficiales. Este temor causa aprensión al oficial y debe tener capacidad suficiente para doblegar su voluntad. Al igual que ocurre con la violencia física, la configuración de la intimidación requiere que se cumplan los requisitos de gravedad, seriedad e inminencia (por ejemplo, amenaza con arma para impedir el cumplimiento de las funciones de la autoridad).

Mendoza (2019) precisa que:

Aunque no es un delito de consecuencia (material), el delito de violencia contra la autoridad, como todo delito, tiene consecuencias jurídicas. Por lo tanto, la intimidación o la coacción deben tener la capacidad suficiente para interferir con un bien jurídico, es decir, para impedir el desempeño de sus funciones.

Como advertimos en las líneas precedentes, si la violencia o la amenaza (medios típicos) no reúnen las características señaladas (gravedad, seriedad y actualidad), no se define el tipo de violencia contra la autoridad, se sigue definiendo como el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad.

Otro aspecto problemático de este delito para jueces y fiscales es el componente subjetivo distinto del dolo: estamos hablando de un elemento de extrema tendencia interna. En términos de Mendoza (2016):

Un elemento de reacción exagerada interna es el uso de la intimidación o la violencia para prevenir o inhibir el comportamiento funcional. De hecho, este componente subjetivo es una representación de nivel superior en la representación mental de una forma objetiva (intimidación o uso de la violencia contra la autoridad), impidiendo la acción funcional.

Parte de la tendencia extrema interna es lo descrito anteriormente sobre la intimidación, porque la amenaza o violencia contra la autoridad no es un acto funcional para prevenir o disuadir, pero no se ha desarrollado una forma subjetiva, porque no existe esa parte de la intimidación, es decir, el

sujeto activo tiende a utilizar la intimidación o la violencia para impedir o prevenir una conducta funcional.

Una función no debe impedir u obstaculizar la realización de un acto, pero la obstrucción efectiva no es un requisito estándar de forma objetiva, como debe ser su intención. Así, la representación mental en el sujeto activo es adecuada, lo que lleva a una asimetría entre el conocido tipo objetiva y la visión subjetiva..

Como hemos visto, la política criminal de delitos violentos fomentada por las autoridades en el Perú es arrestar o enjuiciar conductas ordinarias. Cuestionó seriamente la doctrina y teoría del derecho penal, lo que se manifestó en una política criminal represiva, permitiendo al juez encarcelar a todo aquel que desafiara el poder del Estado, un problema que se agrava aún más en presencia de policías, magistrados o militares.

2.2.3. El principio de ultima ratio como criterio para formular una política criminal del delito de violencia agravada a la autoridad en el Perú

El principio de ultima ratio o de intervención mínima del derecho penal es definido de la siguiente manera:

La necesidad de acceso a la ley penal se refleja en principio de hecho, el cual explica que el derecho penal es la última herramienta que la sociedad debería usar para proteger ciertos derechos legales, a menos que existan otras formas de control formal e informal menos dañinas. La sociedad no debería recurrir a su herramienta

más poderosa si el mismo efecto disuasorio puede lograrse por otros medios menos serios.

Es decir, el derecho penal deberá intervenir solo cuando sea estrictamente necesario en términos de utilidad social general (Carnevali, 2008, pp. 14 y 15).

Luego, en términos de teoría, dogma y legislación, se presentan sugerencias y propuestas para evitar abusos, privilegios o sobrepenas doctrinarias para que la política criminal de delitos violentos sea impulsada por el poder más racional, proporcionado y eficaz en el Perú.

Hoy no se cuestiona que la doctrina de la última ratio limita seriamente el poder punitivo del Estado; sin embargo, surgen dificultades para determinar los criterios que brindan contenido sustantivo, especialmente dados los marcos de política que subyacen a este principio, donde la decisión de incluir la actividad delictiva recae únicamente en la legislatura. En efecto, una de las señas de identidad del derecho penal moderno es su carácter primordialmente relacional, por lo que el derecho penal debe justificarse cuando es claro desde el punto de vista de la eficiencia y la racionalidad.

En esa línea Carnevali (2008)

Se explorarán algunos de los principios del derecho penal, las nuevas tendencias político-criminológicas, la metodología propuesta para el análisis económico del derecho como herramienta para medir

la efectividad, y se explorará el papel de los tribunales constitucionales en lugar de las acciones penales (p. 13).

Carvenali (2008), comprende que:

El sistema de justicia penal y legal tiene como función principal proteger los intereses que se consideran importantes para la sociedad y permite el mantenimiento de la paz social. En otras palabras, el derecho penal está determinado por la finalidad de la pena, y el derecho penal, por tanto, incluye las consecuencias jurídicas, el castigo y las medidas de seguridad (p. 19).

Después de dos siglos del paradigma del derecho penal, ahora le toca el turno al derecho penal de seguridad. Además, el derecho a la interacción final y el respeto a los derechos y libertades de la víctima son en gran medida el resultado de un trabajo académico, crítico, germánico y analítico. No podemos resistirnos a reconocer la relación de ultima ratio en el derecho penal, la cuestión que menciona Carvenali (2008), es:

El contenido ayuda a determinar cuándo el recurso es apropiado y legítimo; ¿Cuándo podrían considerarse apropiados otros medios de solución de controversias, como la sanción de leyes administrativas? (p. 42).

Retomando el tema ya mencionado y profundizándolo, pretendemos tener una propuesta metodológica desde el análisis económico del derecho para medir la efectividad del sistema penal en la formulación de la política penal para el delito de violencia agravada. Si bien la herramienta es muy

estudiada en el mundo anglosajón, la cultura de justicia penal peruana es algo reticente a utilizar mecanismos que involucren potencial económico. Esta negativa se basa en el conflicto entre la eficiencia y el respeto a las garantías. Creemos que ha llegado el momento de huir de estos sesgos, prejuicios y temores a favor de una propuesta metodológica desde un análisis económico del derecho.

El delito de violencia contra la autoridad se configura con la fuerza física y/o intimidación empleada directa o indirectamente contra el funcionario público. Esta violencia y/o intimidación debe poseer la capacidad suficiente para impedir o trabar el ejercicio de su autoridad, es decir, debe ser grave, seria y actual.

Finalmente, la formulación de la política penal de los delitos violentos agravados por parte de las autoridades debe ajustarse a la idea de que el derecho penal no sólo es racional, sino también proporcionado y razonable, es decir, debe intervenir sólo cuando sea absolutamente necesario. Por lo tanto, no puede prescindir de herramientas para medir su eficacia: cómo prevenir el delito al menor costo social. Además, el principio de última ratio debe basarse en consideraciones de eficiencia. En este sentido, Carnevali (2008), afirma:

Si el objetivo del derecho penal es prevenir el delito, así como reducir las respuestas informales y la violencia estatal, se requiere recurrir a herramientas como la amenaza del castigo, como la acción policial. Esto significa un costo social más bajo que el que sugeriría la fuente del crimen o la venganza personal. Es decir, en el

constante autoexamen que debe brindar el derecho penal, debe considerar cuán eficientemente opera al menor costo posible y con el menor impacto posible sobre los derechos fundamentales (p. 46).

2.2.4. El principio de autoridad democrático

Inscribimos en esta tendencia a quienes consideran que el principio de autoridad muta su contenido de acuerdo al sistema de gobierno, ya que en un sistema totalitario debe identificarse con poder, mientras en un sistema constitucional significa servicio social (Lorente, 2010, p. 67). Ahora que las autoridades están sujetas a la Constitución, asumen un evolucionado principio de autoridad democrática en el contexto de un Estado social y democrático de derecho.

Para Carretero (2006), comprende que:

Este principio no solo se quebrantaría con la afrenta a una autoridad, sino también con la ofensa a cualquier persona que acuda en auxilio de la autoridad o funcionario. En consecuencia, también es considerado sujeto pasivo.

Otros planteamientos, como los de López (1996), enuncian que:

El derecho penal democrático no protege la dignidad ni la reputación de las instituciones públicas, sino el desempeño de sus funciones. Sin embargo, concluyeron que la protección de los miembros tendía a proteger a los individuos al cumplir una función social como rasgo personal (p. 201).

Por su parte, Roig (2004) comprende:

No encuentra inconveniente el pronunciarse a favor del principio de autoridad, al cual considera como un mecanismo de tutela dirigido a asegurar las funciones que cumplen autoridades y funcionarios públicos al servicio de los ciudadanos.

En la jurisprudencia española, podemos considerar la STS N.º 8289, de 4 de diciembre del 2007. Esta resolución se aparta de aquella línea que reducía el orden público a un orden jerárquico y de subordinación a la autoridad, y se inclina por identificar el principio de autoridad y orden público con el correcto y normal funcionamiento de las funciones públicas, entendidas como prestaciones relativas al interés general.

El origen del principio de autoridad se remonta al Estado romano, en el que inicialmente la auctoritas fue un atributo del saber socialmente reconocido y que actuaba como un límite a las protestas. Primigeniamente, la auctoritas era entendida como poder socialmente reconocido, para luego entenderse como poder de mando de los magistrados. Entonces, las conductas de atentado eran consideradas como un ataque a esta facultad.

2.2.5. La interpretación de la ley penal: principio de proporcionalidad

Tal como menciona Peña Cabrera (2020):

La interpretación normativa es el peldaño anterior a la aplicabilidad de la ley, por lo que es importante comprender y valorar el sentido y el significado del precepto legal, ya que solo así se logrará garantizar su racionalidad conforme al fin teleológico perseguido por el legislador: la protección preventiva de bienes jurídicos.

El derecho penal fija los alcances de la ley de acuerdo con la ratio de incriminación, ya que ella legitima la intervención del ius puniendi estatal en un orden democrático de derecho, mientras que la sanción de la ley penal es una labor del Parlamento, según los dictados político-criminales del principio de legalidad, por lo que la interpretación normativa es una tarea del juzgador, la cual debe ser realizada en armonía con los principios penales de consagración constitucional.

Si bien el legislador es quien define qué comportamientos son delitos, así como la magnitud de la pena a imponer, no es menos cierto que el operador jurídico debe efectuar un test de razonabilidad y de proporcionalidad antes de aplicar la ley, ya que no es un autómatas aplicador de la misma. Ello se debe a que en la aplicación de la norma juega un rol fundamental los principios de ponderación, de justificación y de proporcionalidad.

Al respecto, en el APE N.º 1-2016 se indica lo siguiente:

Para llevar a cabo la interpretación constitucional de la norma penal, el juez debe comprobar si la norma aplicable es constitucionalmente legal o no. En el campo penal, esta lógica se aplica a otros campos también, pero el principio que ayuda a probar la constitucionalidad de la norma es el principio de proporcionalidad. Aplicar un principio declarado de acuerdo con la doctrina establecida.

Como siempre decimos, una cosa es la legalidad y otra la legitimidad. El primero simplemente sujeta la determinación y sanción de la ley a los procedimientos previstos en la Constitución, mientras que el segundo se

refiere a la adhesión a (de ahí su prohibición legal) la tabla de valores sancionada por el código penal. Los códigos penales son constitucionales.

Son precisamente los test de razonabilidad, de ofensividad, de proporcionalidad y de necesidad los que han sido abiertamente contravenidos con las últimas reformas de la política criminal en el país, ya que han generado problemas de sobrecriminalización tanto en diversos delitos como en la modalidad agravada del delito de violencia contra un funcionario público.

Además, en el APE N.º 1-2016 se indica lo siguiente:

Es responsabilidad de todos los operadores jurídicos para garantizar que realicen sus funciones dentro de los límites de la constitución por dos razones. En primer lugar, desde el punto de vista formal, la Constitución Política es la norma básica del ordenamiento jurídico. En consecuencia, las facultades creadas o derivadas de la legislación deben encontrarse de conformidad con la Ley Fundamental, independientemente de la estructura del ordenamiento jurídico. En segundo lugar, por tener validez sustantiva, se toma como expresión, más que como concreción, de los principios o valores consagrados en la constitución.

Ahora es el momento de introducir el principio de proporcionalidad. El ejercicio de la acción punitiva (sancionadora) por parte del Estado debe limitarse a una grave carga sobre el derecho fundamental de la libertad

individual, es decir, la reacción del Estado debe ser proporcional al delito que pueda derivar en consecuencias jurídicas.

El interés público es lo que justifica la acción punitiva en el ámbito de las libertades civiles, esto es, cuando se producen ataques intolerables a los fundamentos existentes de cualquier sociedad, o cuando existen perturbaciones insostenibles en el entendimiento individual o barreras a la participación en ellos; procesos sociales que pueden ser más estrechamente restringidos por cualquier medio de control social que el derecho penal. Esta legitimidad está asegurada por el principio de proporcionalidad.

El principio de prohibición de exceso o de proporcionalidad señala Peña Cabrera (1988), comprende que:

En un principio parece haber un límite a la posibilidad de que la policía se convierta en un principio fundamental de derecho público, ya que su aplicación afecta liberalmente a todas las medidas contra la libertad personal del ciudadano (p. 84).

Diez (2007), comprende que:

El principio de proporcionalidad, como principio independiente de los principios de permisividad, presupone la presencia de la pena, es decir, del sufrimiento derivado de su naturaleza y gravedad o de los efectos socio personales que produce. Adaptado a la importancia del interés del objeto protegido y la gravedad de la obligación paralela (p. 162).

Por el principio de proporcionalidad Silvia (1992), comprende que:

Los objetivos del derecho penal están determinados por este proceso, porque las sentencias penales (proporcionalidad abstracta) o las medidas punitivas (proporcionalidad específica) no tienen conexión evaluativa con el proceso en el mundo en cuestión (p. 260).

Éstas o las disposiciones de derecho penal que afecten al contenido esencial de los derechos y libertades fundamentales no limitarán la acción. Por lo tanto, evaluar la constitucionalidad de una ley penal implica un importante análisis de discrecionalidad en el que los tribunales constitucionales no pueden interferir. Así, la tipificación de conductas desde la doctrina constitucional implica siempre una injerencia en derechos fundamentales; por lo que corresponde a los tribunales constitucionales determinar si el proceso penal tiene prescripción válida o, por el contrario, determinar la vulneración de estos derechos (Bernal, 2005, p. 116).

Respecto al test de proporcionalidad, en el APE N.º 1-2016, en su f. j. n.º 13, se sostiene lo siguiente:

La prueba de proporcionalidad implica tres pasos para determinar la constitucionalidad de una ley, a saber, la sanción procesal o implícita. La primera prueba es la adecuación, esta sección establece que un estatuto penal (el delito imputado o la sanción contemplada) puede ayudar a lograr objetivos constitucionales estatutarios. Se necesita un segundo intento, si existe un

mecanismo alternativo que permita alcanzar el objetivo constitucional. Si no existiera este mecanismo, esta parte de la prueba pasaría. La tercera prueba es estrictamente proporcional. El proceso implica entrenamiento estricto de la ponderación.

La función político-criminológica del principio de proporcionalidad es describir la gravedad del derecho fundamental vulnerado y los intereses que persigue, es decir, la finalidad social a la que debe responder la sanción penal. Por lo tanto, los resultados esperados deberían ser claramente más beneficiosos que el impacto de la injerencia en el campo de las libertades civiles.

De acuerdo con los postulados del derecho penal democrático, la sanción debe ser proporcional a la escala de conductas ilícitas de carácter delictivo, es decir, al grado de lesión de los bienes jurídicos tutelados. Esta armonía, que muestra el grado de inmovilidad del acto (delictivo) absoluto y la gravedad de la reacción delictiva, es necesaria para la imposición de la pena con cierta legalidad. Al respecto, en el R. N. N° 5173-2006-Piura se señaló lo siguiente:

El legislador ha definido los tipos y montos de las penas, pero no de manera definitiva y absoluta, sino que ha establecido criterios para que el juez personalice y determine las penas. En esa medida, el principio estatal debe aplicarse para que la responsabilidad del demandado no sea menos que razonable.

Si es que se imponen sanciones que desbordan los márgenes de razonabilidad (acorde a la proporcionalidad), la pena se convierte en una

respuesta arbitraria, irrazonable y, por ende, carente de todo visto de legitimidad. En ese sentido, en el APE N° 1-2016 se manifiesta lo siguiente:

Una interpretación, según los principios, viene a remediar la situación de injusticia por falta de equidad o ausencia de una ley. Los principales principios a examinar son el principio de legalidad, el principio de daño y el principio de culpabilidad.

Los principios fundamentales señalados en el APE N° 1-2016 son los que corrigen los excesos del legislador en la ley penal y los que someten la aplicabilidad de las normas a los márgenes de la razonabilidad y de la proporcionalidad.

2.2.6. El bien jurídico protegido

En el título XVIII del Código Penal, los delitos tipificados por el legislador a partir del Consideración de Política Criminal bajo el rótulo Delitos contra la administración del Estado son delitos graves cometidos por funcionarios o servidores públicos. El marco especial de la función pública (su propio delito especial), donde la violación de los deberes de la función (durante la ejecución funcional). Además, los delitos cometidos por particulares (ajenos) están incluidos en la capitulación primera (extraneus).

Bajo la proposición dogmática, en efecto, según la división propuesta en la legalidad, lege lata, debemos reconocer la propiedad jurídica protegida, porque la postulación del reconocimiento es incorrecta. Aunque el interés jurídico se fundamenta en criterios generales que orientan el correcto y

adecuado funcionamiento de la administración pública de acuerdo con los parámetros del derecho social y democrático.

Ossa (2000), afirma que:

Las perturbaciones que puedan suscitarse como consecuencia del desvalor de la conducta del intraneus son de mayor afectación, ya que está inmerso en el aparato público-estatal y, en consecuencia, defrauda las legítimas expectativas de los comunitarios, bajo el entendido de que toda la actuación de la administración ha de satisfacer los intereses generales, tal como se desprende del art. 39 de la Ley Fundamental. Con lo anterior no queremos decir que las conductas típicas similares a las previstas en el art. 368 del texto punitivo no merezcan una pena, sino que la reacción penal debe ser modulada de acuerdo con el grado de la afectación de la función pública, por lo que los delitos estrictamente funcionariales justifican una punición de mayor intensidad.

Los aparatos públicos del Estado (Gobierno) se rigen no sólo por la neutralidad, objetividad e independencia, normas constitucionales (ius fundamentales), sino también por contenidos materiales de interés jurídico protegidos contra delitos como el hurto, el blanqueo de capitales, el cohecho y la asociación ilícita, frente a este criterio rector en el ordenamiento jurídico: el principio de legalidad. El espectro normativo se refiere no sólo a los funcionarios públicos que obedecen a los límites estrictos de la ley, sino también a la máxima extensión de la ley que genera algún tipo de responsabilidad por el incumplimiento

(desobediencia) de los particulares (los gobernados), puede dar lugar a una infracción del orden penal.

Por ello, cabe decir que una sociedad organizada política y jurídicamente en un sistema democrático conduce a una serie de resultados en las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, lo que se refleja en la variedad de instrucciones normativas que regulan la jerarquía jurídica.

Por otro lado, entra en juego el llamado principio de jurisdicción, y se confieren a los funcionarios públicos determinadas facultades de decisión que afectan a la creación, modificación o supresión de determinadas situaciones jurídicas. Los tribunales suelen ser situaciones jurisdiccionales, además, estos funcionarios están facultados para que sus órdenes o decisiones sean cumplidas y ejecutadas por los usuarios de la administración de justicia so pena de incurrir en la tipificación penal contenida en el art. 368 del CP.

Ya sea la obediencia obligatoria o voluntaria a la orden de un funcionario implica una ruptura de los fundamentos de la ley, que es la base legal de la gobernabilidad. Al respecto, Ossa (2000) señala lo siguiente: El poder público es inherente a la administración del Estado, pues no puede entenderse que cumple su deber en el interés público sin su poder represivo en el ejercicio deliberado de su función pública.

Ahora bien, García y Fernández, (2005), en la doctrina española se observa lo siguiente:

La legitimidad define y ejerce la autoridad. La acción administrativa es tal facultad para ejercer, modificar, suprimir, restringir, cumplir alguna relación jurídica. Este mecanismo técnico tiene un sinfín de dinámicas de vida administrativa.

La estructura funcional de la sociedad se inicia con la sanción de diversos derechos y obligaciones, que reflejan normas jurídicas que se positivizan y establecen condiciones para la convivencia pacífica de los ciudadanos. En tal carácter, los ciudadanos deben orientar sus acciones a roles específicos, cuyo sentido y dinámica dependen de las circunstancias particulares de cada individuo.

En el sentido de que ciertas normas (actos administrativos, decisiones administrativas, decisiones jurisdiccionales, etc.) emitidas por la autoridad estatal competente son vinculantes para los destinatarios (administrativos), deben existir las presunciones pertinentes.

Así, el pleno cumplimiento de los decisores (tanto administrativos como judiciales) es inherente al funcionamiento del Estado constitucional de derecho. Lógicamente, el derecho de oposición surge cuando se pretende la ejecución de órdenes manifiestamente ilegales, así como de órdenes que se desvían de los parámetros normativos.

Al conferir ciertas facultades, la administración se vincula con lo administrativo, lo que, en sentido estricto, permite el pleno funcionamiento del ordenamiento jurídico. Además no se puede considerar el verdadero poder del estado de derecho si se ignoran las normas emitidas por los

distintos niveles de la administración pública, pues ello conducirá al debilitamiento del principio de legalidad.

Con respecto a lo indicado, Dromi (2006) señala lo siguiente:

La acción estatal externalizada en cualquiera de sus formas (acto, reglamento, acto administrativo y acuerdo administrativo, ley, decisión y acto político) tiene consecuencias jurídicas directas o indirectas. Estas funciones son los derechos (o poderes) y los deberes (u obligaciones) de las partes interdependientes y se traducen en la relación jurídica entre la administración (el Estado) y los gobernados (los particulares), entre el derecho y la libertad.

Por tanto, no se puede decir que hay libertad donde los ciudadanos desprecian y desobedecen los mandatos de la ley ni donde las autoridades gubernamentales instrumentaban las normas y las prescripciones y eluden la legitimidad, solo con la finalidad de reprimir y de oprimir a la ciudadana.

Dromi (2006), comprende que:

La relación vinculante entre el Estado y el individuo se expresa en un instrumento jurídico que genera derechos y hace cumplir obligaciones. El principio de legalidad aparece primero en la letra de la constitución y se traslada al ordenamiento jurídico (p. 132).

Como consecuencia Ossa (2000) comprende que:

El principio de legalidad juega un papel estatutario en el sentido de que la administración no puede abusar de los intereses creados, pero esto no excluye el otorgamiento de facultades discrecionales (p.6-7)

Como se ha señalado, el derecho jurídico en este tipo penal se encuentra amparado por los principios de legalidad y jurisdicción según la idea filosófica del derecho del ius filosófica.

De acuerdo a lo que menciona Dona (2001), se comprende que:

El bien jurídico protegido es la acción libre del funcionario público, por lo que la resistencia lesiona el orden de la Administración pública, va que se ataca el ejercicio de, la libertad funcional. Por ello, el tipo penal protege, inmediatamente, la libre acción del funcionario público mediatamente, el orden de la administración (p. 58).

En la doctrina nacional García (2009), analiza que:

El estado de derecho es fundamental para el buen funcionamiento de la administración pública, y un interés especial a este respecto surge durante el período anterior de la función pública. Esto significa que el núcleo de la devaluación es la fase ejecutiva del orden del servicio civil (p. 141).

Una salvedad importante a reconocer es que cuando hablamos del cumplimiento de mandatos legales por parte de funcionarios y

ciudadanos, no nos referimos al concepto formal de legalidad, sino a un sentido más sustantivo, el positivismo extremo toma la posición más cercana al neoconstitucionalismo, donde se garantizan los derechos y libertades fundamentales.

2.2.7. Definición de términos.

Principio de autoridad

La autoridad real a todo cuanto conduce a la conservación del orden público en lo interior, se hace referencia a la necesidad de revestir al monarca de una autoridad verdaderamente poderosa

Violencia contra la autoridad

Intimidar o acosar a un funcionario público o a una persona que ayude a un funcionario público, excepto a petición suya, con el fin de obstruir u obstaculizar la aplicación de la ley.

Principio de ultima ratio

La necesidad de acceso a la ley penal se refleja en principio, de hecho, explica que el derecho penal es la última herramienta que la sociedad debería usar para proteger ciertos derechos legales, a menos que existan otras formas de control formal e informal menos dañinas.

Delito de violencia contra la autoridad

La fuerza física y/o intimidación empleada directa o indirectamente contra el funcionario público. Esta violencia y/o intimidación debe poseer la capacidad suficiente para impedir o trabar el ejercicio de su autoridad, es decir, debe ser grave, seria y actual.

CAPÍTULO III: ANALISIS Y RESULTADOS

3.1. Análisis de los resultados

Tabla 1

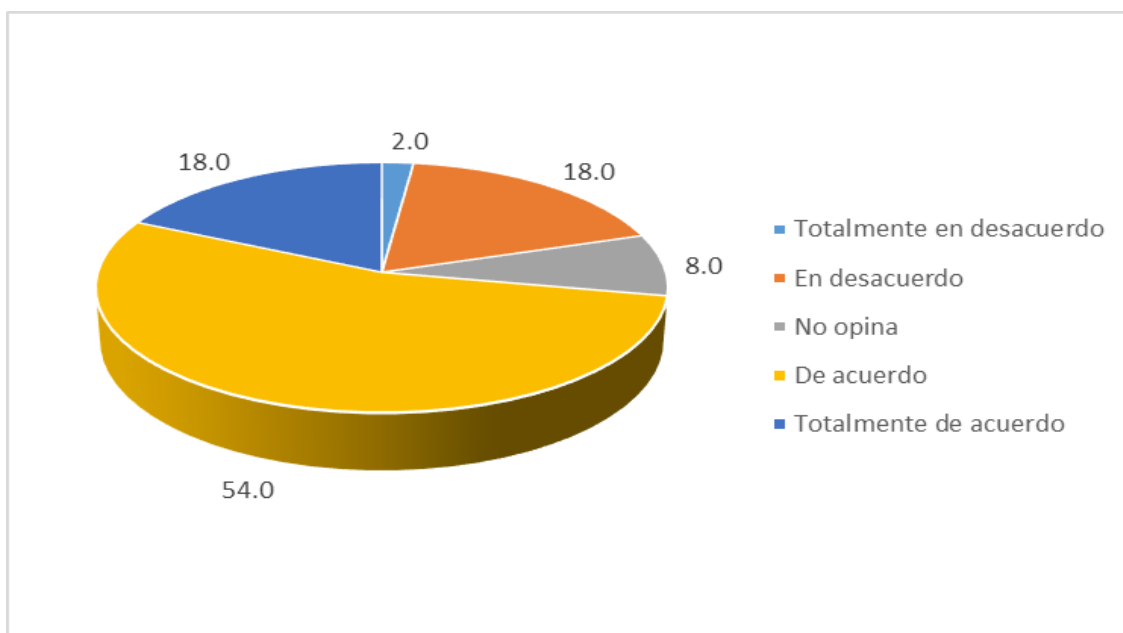
Conflicto entre los derechos.

Descripción	Frecuencia	Porcentaje
Totalmente en desacuerdo	1	2.0
En desacuerdo	9	18.0
No opina	4	8.0
De acuerdo	27	54.0
Totalmente de acuerdo	9	18.0
Total	50	100.0

Nota: Encuesta aplicada a Abogados especialistas en derecho Penal.

Figura 1.

Conflicto entre los derechos.



Nota: Teniendo en consideración los resultados que han sido obtenidos a través de la encuesta aplicada a los expertos en materia penal, se puede afirmar que el 54% que representa la gran mayoría de los encuestados, estos expresan estar de acuerdo en que existe una sobre criminalización en el delito de violencia agravada a la autoridad y como último porcentaje se tiene al 2.0% de los especialistas, los cuales demuestran estar rotundamente en desacuerdo con la pregunta aplicada a su persona.

Tabla 2

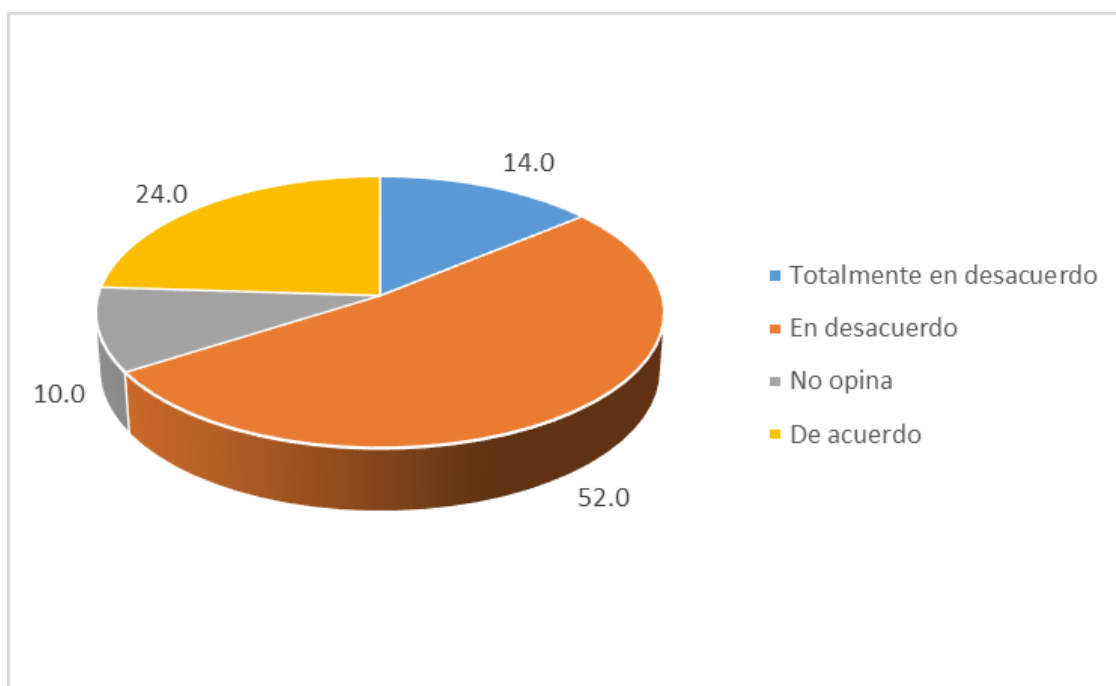
Vulneración del derecho a la intimidad.

Descripción	Frecuencia	Porcentaje
Totalmente en desacuerdo	7	14.0
En desacuerdo	26	52.0
No opina	5	10.0
De acuerdo	12	24.0
Total	50	100.0

Nota: Encuesta aplicada a Abogados especialistas en derecho Penal.

Figura 2.

Vulneración del derecho a la intimidad.

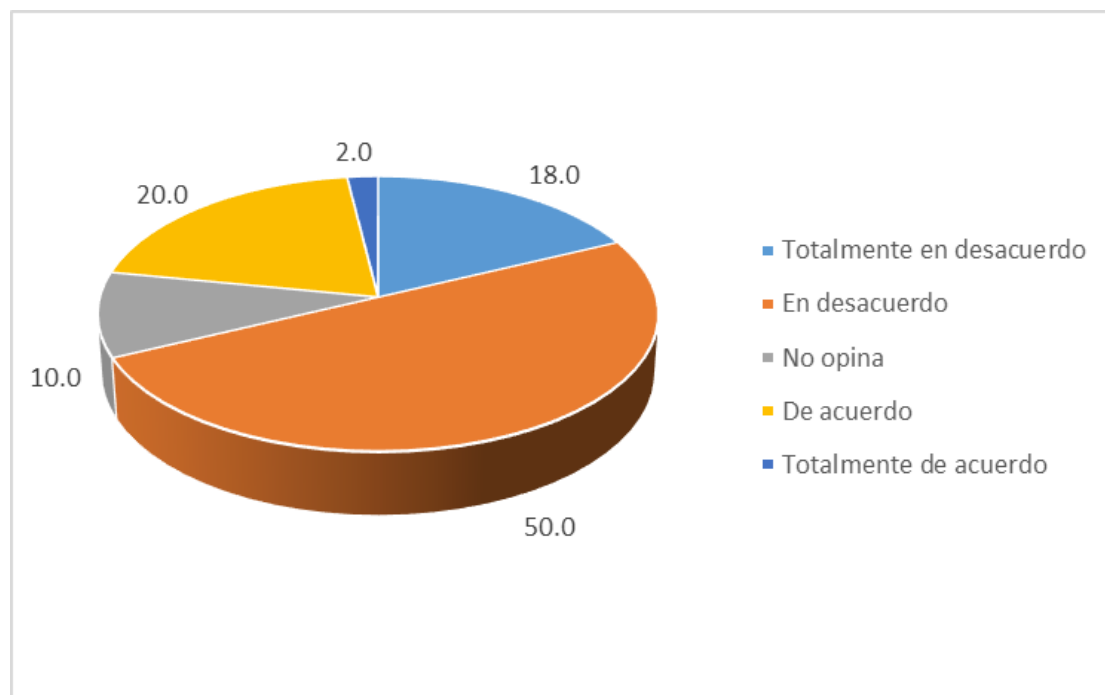


Nota: Se puede afirmar que el 52% de los participantes dan a entender que se encuentra en desacuerdo en que si se aplica el principio de ultima ratio en el delito de violencia agravada a la autoridad, ya que es evidente que en la actualidad este mecanismo jurídico no es aplicable, sin embargo existe un 10% de los encuestados que prefieren mantenerse al margen de la pregunta y evitaron emitir su opinión sobre la pregunta.

Tabla 3**Legislación peruana.**

Descripción	Frecuencia	Porcentaje
Totalmente en desacuerdo	9	18.0
En desacuerdo	25	50.0
No opina	5	10.0
De acuerdo	10	20.0
Totalmente de acuerdo	1	2.0
Total	50	100.0

Nota: Encuesta aplicada a Abogados especialistas en derecho Penal.

Figura 3.**Legislación peruana.**

Nota: Prosiguiendo con la interpretación de los resultados, se puede afirmar que el 50% de los expertos señalan estar en desacuerdo en que si se aplica el principio de proporcionalidad en el delito de violencia agravada a la autoridad, ya que es evidente que hoy en día el principio de proporcionalidad es una figura jurídica poco aplicada, por otro lado se tiene un resultado distinto el cual es representado por el 2.0% de los encuestados que señalan estar a favor de la pregunta brindando su conformidad.

Tabla 4

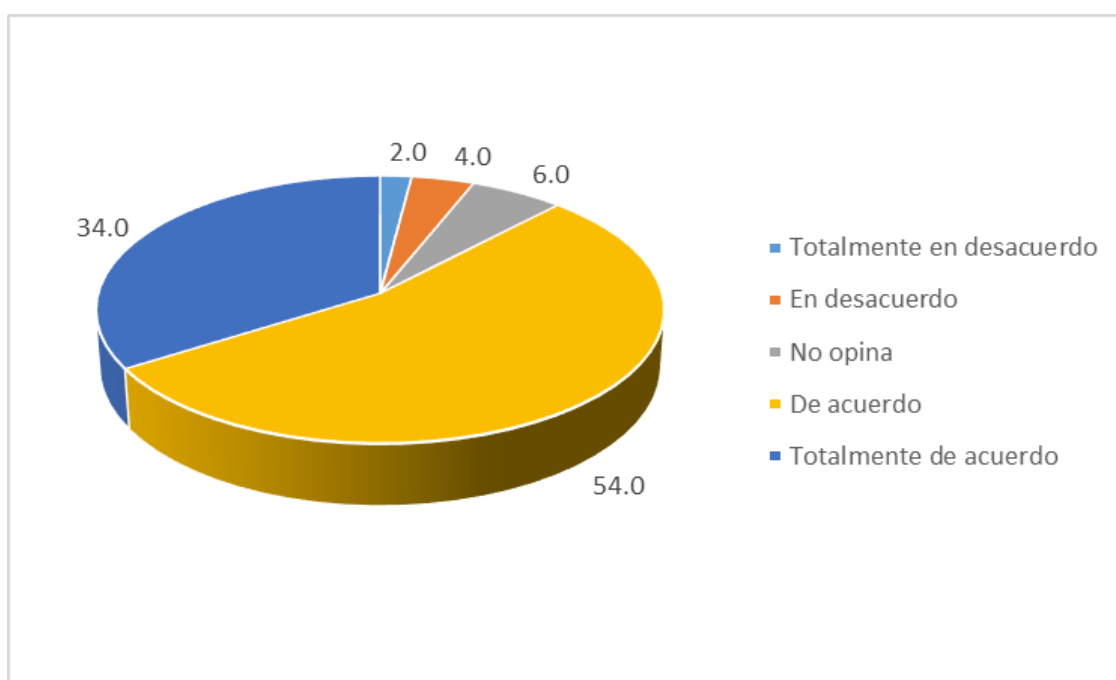
Efectos que surgen mediante el conflicto de los derechos.

Descripción	Frecuencia	Porcentaje
Totalmente en desacuerdo	1	2.0
En desacuerdo	2	4.0
No opina	3	6.0
De acuerdo	27	54.0
Totalmente de acuerdo	17	34.0
Total	50	100.0

Nota: Encuesta aplicada a Abogados especialistas en derecho Penal.

Figura 4.

Efectos que surgen mediante el conflicto de los derechos.



Nota: Continuando con la interpretación de los resultados obtenidos por le encuesta aplicada, se puede asegurar que 54% de los conocedores del derecho dan a conocer que si están a favor en que se deba aplicar el principio de ultima ratio y proporcionalidad en el delito de violencia agravada a la autoridad, sin embargo existe un 2.0% de los conocedores del derecho que piensan lo contrario y manifiestan que no debería ser aplicable estos principios.

Tabla 5

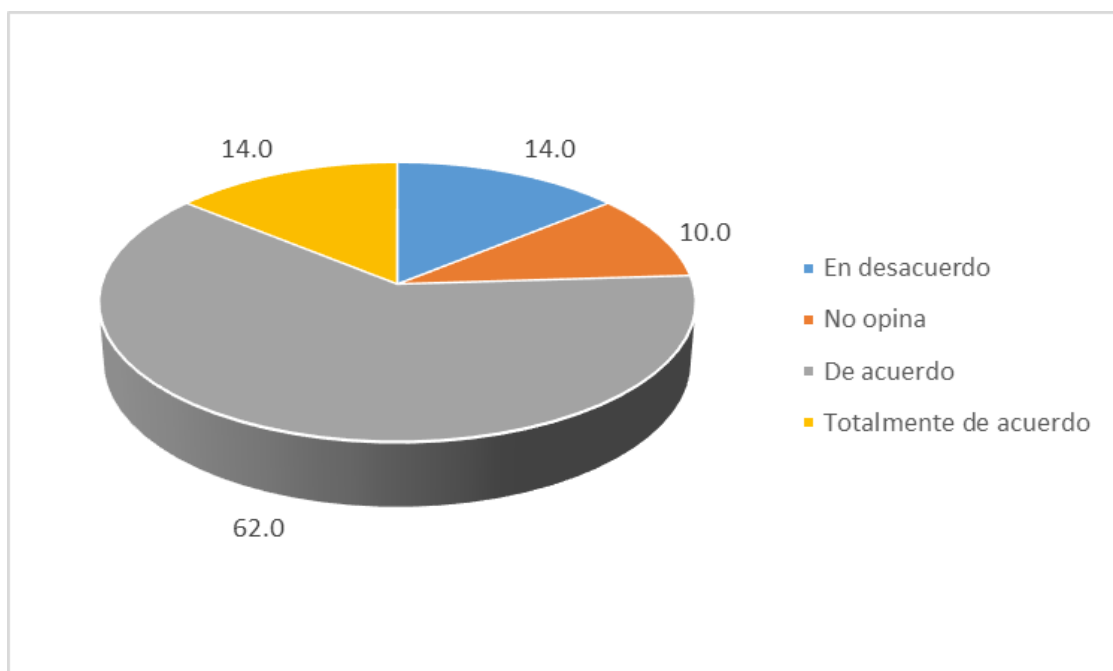
Derechos constitucionales.

Descripción	Frecuencia	Porcentaje
En desacuerdo	7	14.0
No opina	5	10.0
De acuerdo	31	62.0
Totalmente de acuerdo	7	14.0
Total	50	100.0

Nota: Encuesta aplicada a Abogados especialistas en derecho Penal.

Figura 5.

Derechos constitucionales.



Nota: Se puede afirmar que el 62% de los participantes dan a entender que se encuentra de acuerdo en que la legislación nacional resulta desproporcionada en función al delito de violencia agravada a la autoridad, ya que es evidente que en la actualidad estos actos delictuosos son muy común, sin embargo existe un 10% de los encuestados que prefieren mantenerse al margen de la pregunta y evitaron emitir su opinión sobre la pregunta.

Tabla 6

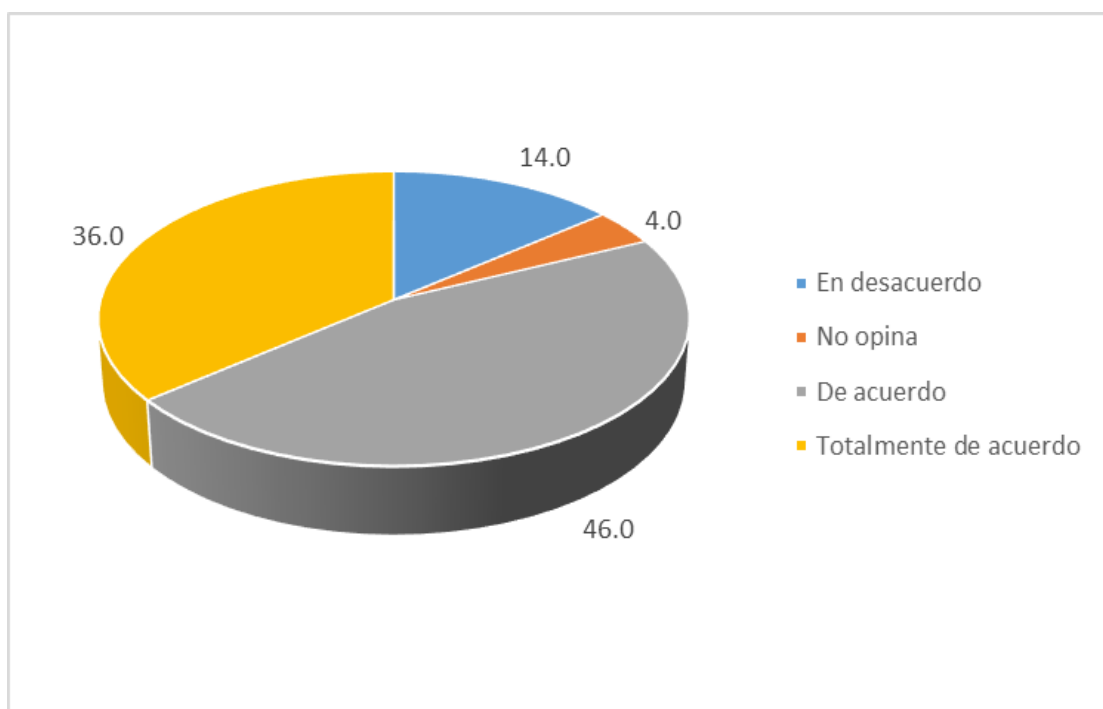
Derecho a la intimidad y su sobre posición.

Descripción	Frecuencia	Porcentaje
En desacuerdo	7	14.0
No opina	2	4.0
De acuerdo	23	46.0
Totalmente de acuerdo	18	36.0
Total	50	100.0

Nota: Encuesta aplicada a Abogados especialistas en derecho Penal.

Figura 6.

Derecho a la intimidad y su sobre posición.



Nota: Prosiguiendo con la interpretación de los resultados, se puede afirmar que el 46% de los expertos señalan estar de acuerdo en que la sobre criminalización de las conductas típicas ha generado sobrecarga procesal ocasionando de esta manera un demora procesal, por otro lado se tiene un resultado distinto el cual es representado por el 4.0% de los encuestados que prefieren no opinar sobre la pregunta aplicada a su persona.

Tabla 7

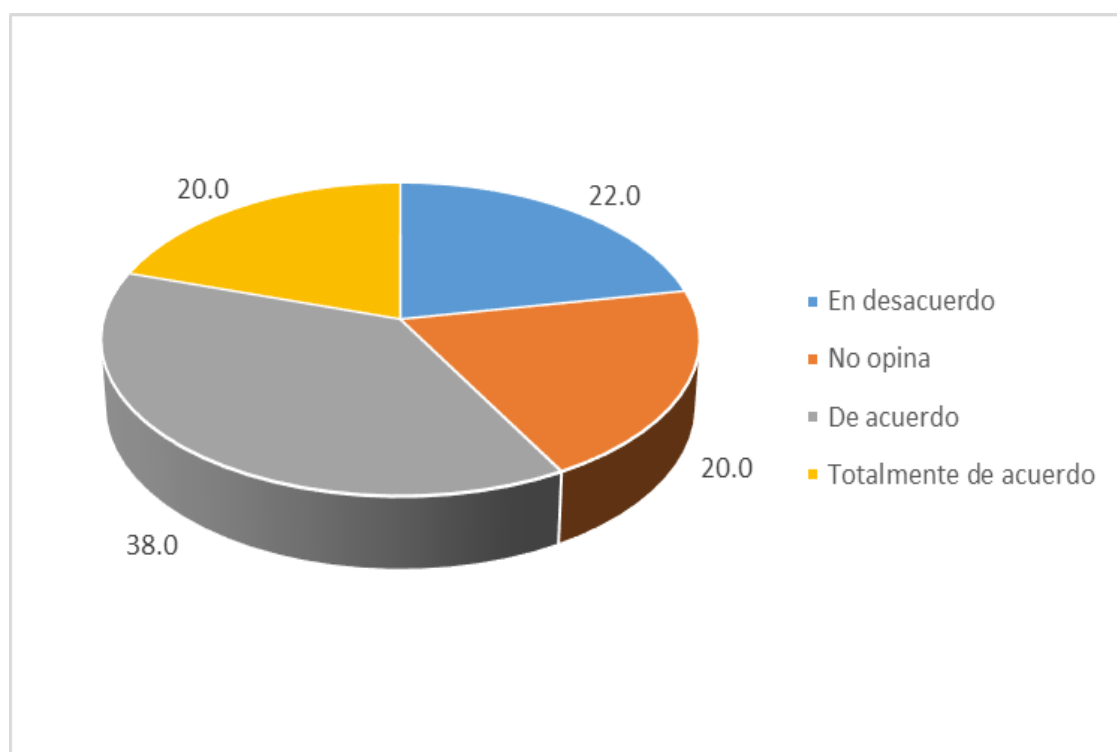
Derecho a la libertad.

Descripción	Frecuencia	Porcentaje
En desacuerdo	11	22.0
No opina	10	20.0
De acuerdo	19	38.0
Totalmente de acuerdo	10	20.0
Total	50	100.0

Nota: Encuesta aplicada a Abogados especialistas en derecho Penal.

Figura 7.

Derecho a la libertad.



Nota: Continuando con la interpretación de los resultados obtenidos por le encuesta aplicada, se puede asegurar que 38% de los conocedores del derecho dan a conocer que si están a favor en que la doctrina es unánime al señalar que dicha política criminal resulta un despropósito y debe ser seriamente analizada y modificada desde un enfoque de derechos humanos, sin embargo existe un 20% de los participantes que prefieren no opinar sobre la pregunta aplicada a su persona.

Tabla 8

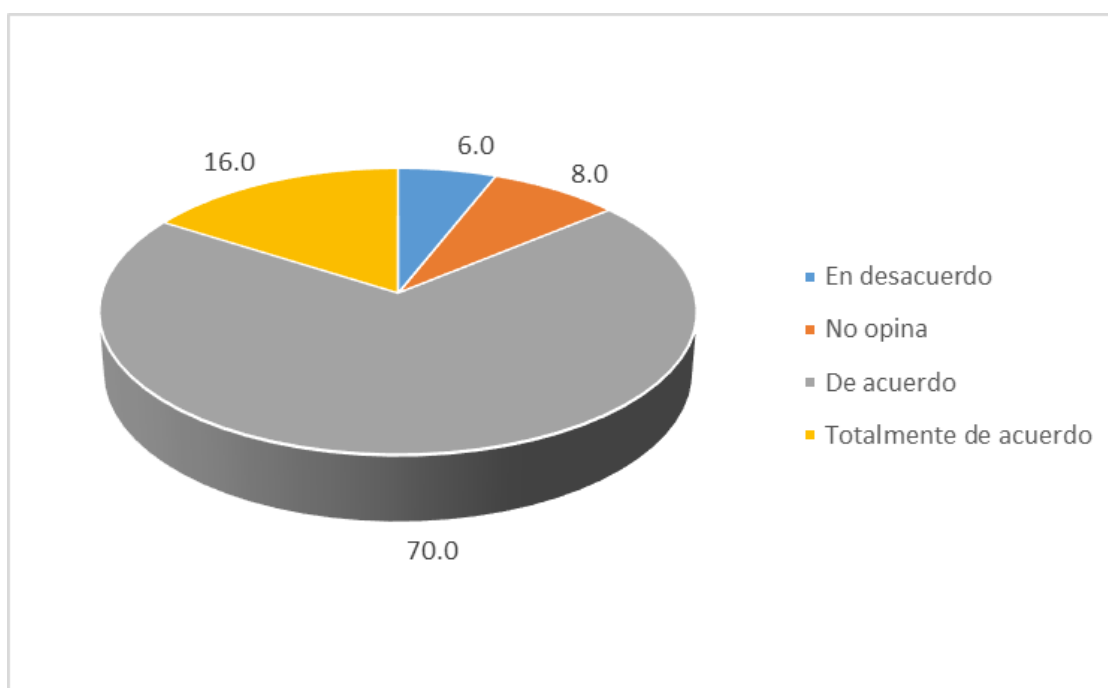
Parámetros de aplicación.

Descripción	Frecuencia	Porcentaje
En desacuerdo	3	6.0
No opina	4	8.0
De acuerdo	35	70.0
Totalmente de acuerdo	8	16.0
Total	50	100.0

Nota: Encuesta aplicada a Abogados especialistas en derecho Penal.

Figura 8.

Parámetros de aplicación.



Nota: Teniendo en cuenta al 70% de los participantes, se puede asegurar que están de acuerdo en que mientras no se modifique la legislación respecto al delito de violencia contra la autoridad y sus agravantes al juez no le quedará más que recurrir a valorar la responsabilidad del autor y el comportamiento de la víctima como alternativa de solución a los problemas de desproporcionalidad de las penas, sin embargo por otro lado existe un resultado distinto el cual es representado por el 6.0% de los encuestados que dan a conocer que están en desacuerdo.

Tabla 9

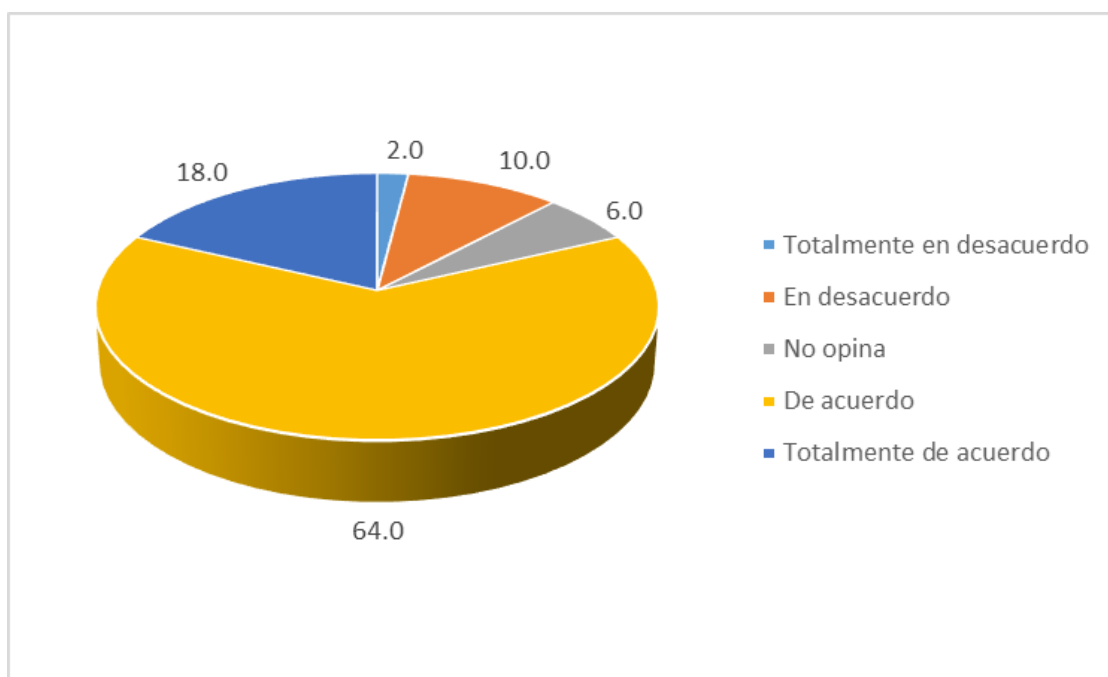
Derecho a la intimidad.

Descripción	Frecuencia	Porcentaje
Totalmente en desacuerdo	1	2.0
En desacuerdo	5	10.0
No opina	3	6.0
De acuerdo	32	64.0
Totalmente de acuerdo	9	18.0
Total	50	100.0

Nota: Encuesta aplicada a Abogados especialistas en derecho Penal.

Figura 9.

Derecho a la intimidad.



Nota: Tomando en cuenta lo expresado por el 64% de los participantes, se puede afirmar que están de acuerdo en que cuando la intervención policial no sigue los procedimientos jurídicos, es decir hay abuso de autoridad no se configura la agravante, sin embargo por otro lado existe un resultado distinto el cual es simbolizado por el 2.0% de los encuestados que manifiestan estar totalmente en desacuerdo con la pregunta aplicada a su persona.

Tabla 10

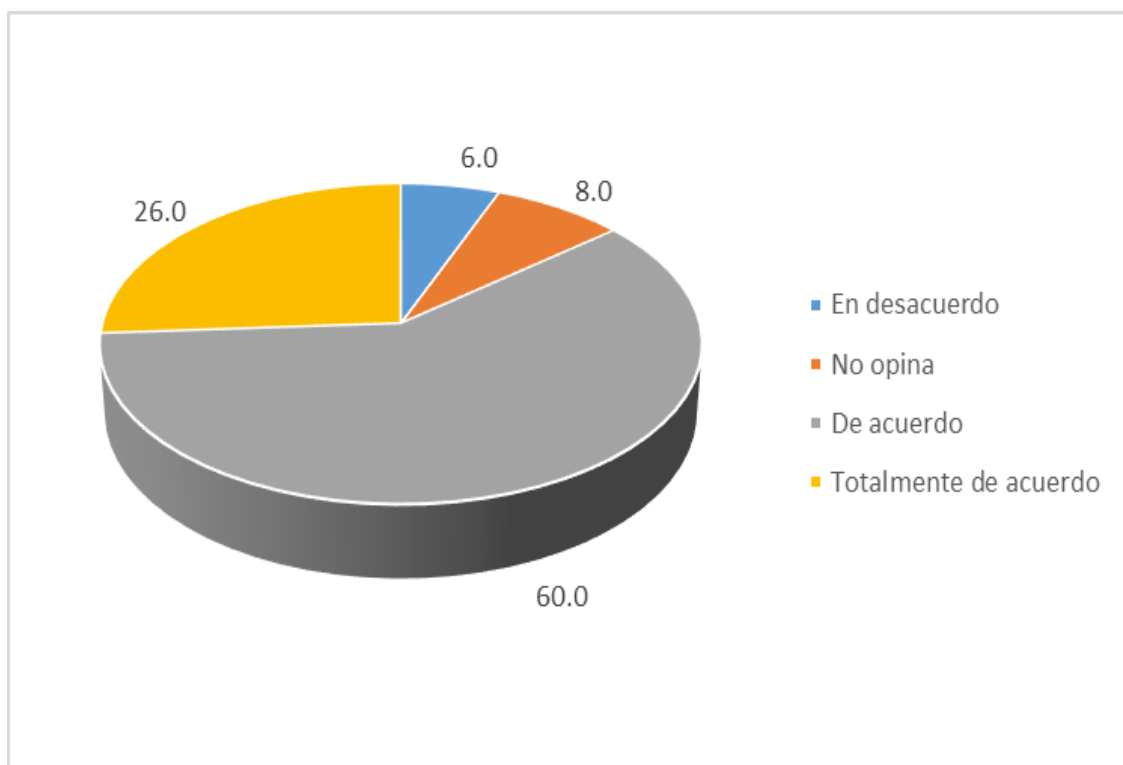
Derecho libertad de expresión e información.

Descripción	Frecuencia	Porcentaje
En desacuerdo	3	6.0
No opina	4	8.0
De acuerdo	30	60.0
Totalmente de acuerdo	13	26.0
Total	50	100.0

Nota: Encuesta aplicada a Abogados especialistas en derecho Penal.

Figura 10.

Derecho libertad de expresión e información.



Nota: Para culminar la interpretación de resultado se ha tenido en cuenta lo expresado por el 60% de los participantes, los cuales manifiestan estar de acuerdo en que se deba modificar la normativa respecto al tipo penal establecido en el delito de violencia agravada a la autoridad, sin embargo existe un 6.0% de los encuestados que piensan lo contrario y manifiestan estar en desacuerdo con la pregunta que se les ha aplicado.

CAPITULO IV: CONTRASTACIÓN DE LA HIPOTEIS

Una vez obtenidos los resultados desarrollados en el capítulo anterior, se procedió a la contrastación, cumpliendo de esta manera los lineamientos establecidos para una correcta investigación, es por ello que se tiene en cuenta al objetivo general el cual busca realizar un análisis ante la sobrecriminalización en el delito de violencia agravada a la autoridad y la necesidad de aplicación del principio de ultima ratio y proporcionalidad, para ello se tiene en cuenta lo obtenido en la Figura 4 el cual explica que continuando con la interpretación de los resultados obtenidos por la encuesta aplicada, se puede asegurar que 54% de los conocedores del derecho dan a conocer que si están a favor en que se deba aplicar el principio de ultima ratio y proporcionalidad en el delito de violencia agravada a la autoridad, sin embargo existe un 2.0% de los conocedores del derecho que piensan lo contrario y manifiestan que no debería ser aplicable estos principios, es evidente a través del presente resultado que hoy en día el principio de ultima ratio y proporcionalidad, son figuras jurídicas que no se aplican en los casos de violencia agravada, sin embargo estas principios son mecanismo idóneo para evitar que exista una sobre criminalización de los actos, es por ello que al compararlo con lo sustentado por Correa (2019), en su investigación, expresa: Diversos criterios para poder delimitar los delitos de desobediencia o resistencia y rebelión previstos dentro del derecho a la resistencia, tesis para optar el título profesional de magister en derecho penal de la Universidad de Cuenca, en donde se establece que dentro de la legislación ecuatoriana una resistencia a la autoridad de manera gradual, es decir que esta se va delimitar proporcionalmente para poder corregir la violencia que se ha

ejecutado y llegar a asegurar la efectividad que tiene que tener el Estado, así mismo utilizar el poder penal para poder criminalizar la protesta social, por lo que se requiere una fuerza eficaz ante la legitimidad de política. Es importante resaltar que en la actualidad existen gran cantidad de casos en los cuales existe una sobrecriminalización de los actos, los cuales han sido generados por los mismos efectivos policiales y otros efectivos representantes del estado, sin que existan mecanismos a favor de las personas imputadas.

Continuado con la contrastación de resultados, se tendrán en cuenta al primer objetivo específico, el cual busca identificar si existe una sobrecriminalización en el delito de violencia agravada a la autoridad, para ello se tendrá en cuenta lo obtenido en la Figura 1. Teniendo en consideración los resultados que han sido obtenidos a través de la encuesta aplicada a los expertos en materia penal, se puede afirmar que el 54% que representa la gran mayoría de los encuestados, estos expresan estar de acuerdo en que existe una sobre criminalización en el delito de violencia agravada a la autoridad y como último porcentaje se tiene al 2.0% de los especialistas, los cuales demuestran estar rotundamente en desacuerdo con la pregunta aplicada a su persona. Al generar una sobrecriminalización de los actos frente a la violencia agravada a la autoridad, no solo perjudica a la persona procesada, sino que afecta rotundamente a una sociedad ya que mediante estas situaciones se incrementa la actual carga procesal que se vienen dando en las entidades del estado, es por ello que al compararlo con lo sustentado por Hernández (2018), en su investigación se explica que se

requiere: Aplicar una reforma al principio de oportunidad en función al principio de la mínima intervención penal, esta investigación ha sido presentada para poder obtener el título profesional de abogado de la Universidad Central del Ecuador, en donde interpreta a través de su conclusión que desde el principio de mínima intervención es posible resumir de la proporcionalidad final y la violación de la ley penal, que en general representan una garantía de limitación del estado lus Puniendi, que justifica la intervención de este estado, no solo cuando sea necesario, sino para mantener su institución política en un sistema democrático. Los actos que se viene sobre criminalizando frente a las actuaciones de las autoridades del estado, se puede afirmar que no generan que se vulnere distintos derechos, sino que exista un abuso de autoridad, ocasionando de esta manera que las actuaciones realizadas de vuelvan comunes y repetibles ante otras situaciones.

Prosiguiendo con el segundo objetivo específico, el cual busca el análisis del principio de ultima ratio y proporcionalidad en el delito de violencia agravada a la autoridad, en el cual se tiene en cuenta lo obtenido en la Figura 3. Prosiguiendo con la interpretación de los resultados, se puede afirmar que el 50% de los expertos señalan estar en desacuerdo en que si se aplica el principio de proporcionalidad en el delito de violencia agravada a la autoridad, ya que es evidente que hoy en día el principio de proporcionalidad es una figura jurídica poco aplicada, por otro lado se tiene un resultado distinto el cual es representado por el 2.0% de los encuestados que señalan estar a favor de la pregunta brindando su conformidad; ante lo mencionado en el líneas arriba es necesario

compararlo con lo sustentado por Ruiz, (2020), en su investigación titulada, La violencia y resistencia a la autoridad policial en la proporcionalidad de la pena en la ciudad de Chiclayo, comprende: La violencia y resistencia a la autoridad policial, frente a la proporcionalidad de la pena, esta investigación ha sido realizada para poder optar el título profesional de abogado de la Universidad Señor de Sipán, en donde se ha concluido que la violencia y la resistencia en la autoridad policial pueden influir mucho en la proporción de condena, porque la violencia y la resistencia pueden ser detectadas por el departamento de policía de Chiclayo y es realmente relevante. Si un policía, un miembro de las Fuerzas Armadas, un juez, un fiscal, un miembro de la Corte Constitucional o un gobierno de elección popular prescribe una acción penal, se le imputará una acción penal general, ilícita y penal.

Para finalizar con la contrastación de los resultados, se tendrá en cuenta al último objetivo específico, el cual busca describir bajo que situaciones se podría hacer uso de los principios de ultima ratio y proporcionalidad en el delito de violencia agravada a la autoridad, para ello se tendrá en consideración lo obtenido en la Figura 10, el cual manifiesta que la interpretación de resultado se ha tenido en cuenta lo expresado por el 60% de los participantes, los cuales manifiestan estar de acuerdo en que se deba modificar la normativa respecto al tipo penal establecido en el delito de violencia agravada a la autoridad, sin embargo existe un 6.0% de los encuestados que piensan lo contrario y manifiestan estar en desacuerdo con la pregunta que se les ha aplicado, conforme a lo que se ha desarrollado durante la investigación y párrafo anteriores, se puede

asegurar que hoy en día la correcta aplicación del principio de ultima ratio y proporcionalidad, es necesaria, ya que es evidente que mediante estos mecanismo se podrá evitar que surjan distintos problemas como es la sobrecriminalización de los actos, es por ello que al compararlo con lo sustentado por Otiniano (2019), en su investigación expresa: Proponer una modificación que ayude aplicar el principio de proporcionalidad para adecuar la sanción penal, esta investigación ha sido desarrollada para optar el grado academia de maestro en derecho penal y procesal penal de la Universidad Señor de Sipán, concluyendo que como resultado del análisis de las sentencias, no existe una proporción de multas en nuestro sistema de justicia penal, ya que se ha demostrado que es más severa en los delitos de violencia y resistencia a la autoridad, además se sugiere que en la derogación del artículo anterior, el personal directamente calificado como el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Obras Públicas debe cumplir con los requisitos de elegibilidad. Haciendo hincapié todos los resultados obtenidos y la contrastación de los resultados, se puede afirmar que la presente investigación es favorable para el estado y para los mismos procesados, ya que resulta eficaz que la correcta aplicación del principio de última ratio y proporcionalidad.

CAPITULO IV: CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

- a. A través del análisis realizado ante la sobrecriminalización en el delito de violencia agravada a la autoridad, se logró corroborar la necesidad de una correcta de aplicación del principio de última ratio y proporcionalidad, ya que a través de estos principios se logró determinar una eficacia jurídica obtenidos beneficios no solo para la persona procesada, sino que favorecerá al mismo estado al evitar que se incremente la carga procesal que hoy en día se evidencia en las entidades públicas.
- b. Se ha logrado identificar a través de los distintos casos analizados, la existente sobrecriminalización en el delito de violencia agravada a la autoridad, esto es a causa de uno de los factores más repetitivos, el cual es el abuso del principio de autoridad, ya que a través de este mecanismo los actos que puedan ser respaldados por principio de última ratio y proporcionalidad quedan sin efectos, generando de esta manera una sobre criminalización perjudicando rotundamente al procesado y de igual forma a la misma sociedad.
- c. Al analizar al principio de última ratio y proporcionalidad en el delito de violencia agravada a la autoridad, se logró afirmar la eficiencia de estos principios frente a los actos de violencia agravada, sin embargo no es el único beneficio que se obtendría, ya que a través de estos mecanismo se lograra disminuir correctamente la existente carga procesal que hoy en día se evidencia en las entidades públicas.
- d. Mediante el desarrollo de la investigación se ha logrado describir que el uso de los principios de última ratio y proporcionalidad, se aplicable en las situaciones de conductas de resistencia en el marco de las intervenciones policiales en protestas sociales.

CAPITULO VI: RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

- a.** El estado peruano deberá aplicar correctamente los principios de última ratio y proporcionalidad, para que de esta forma no existe una sobrecriminalización de los actos frente a las funciones de autoridades estatales.
- b.** La intervención del derecho penal, deberá ser analizada desde el punto de vista de la criminalización que hoy en día se evidencia, es por ello que es necesario que esta intervención se aplicada correctamente desde el punto de vista de un delito necesario de investigar hasta al menos delictuoso.
- c.** Al aplicar los principios de última ratio y proporcionalidad, deberán tomar en cuenta los aspectos doctrinales y jurisprudenciales que se han desarrollado en la presente investigación.

REFERENCIAS

- Bedón, E. (2018), Aplicación del principio de proporcionalidad y razonabilidad en la determinación de la pena en el delito de violencia y resistencia a la autoridad policial, en los juzgados penales unipersonales de la provincia de Huaraz, periodo 2017 – 2018, Universidad San Pedro, http://repositorio.usanpedro.edu.pe/bitstream/handle/USANPEDRO/10630/Tesis_60482.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Bernal, C. (2005). *El derecho de los derechos*, Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Carbonell, J. (2007). *Comentarios al Código Penal*, vol. IV, Valencia: Tirant Lo Blanch.
- Carretero, A. (2006). El delito y falta de atentado, resistencia y desobediencia contra la autoridad y sus agentes: una visión realista entre el exceso y el defecto en su aplicación penal práctica, *La Ley, Revista Jurídica Española de Doctrina, Jurisprudencia y Bibliografía*, Madrid.
- Carvenali, R. (2008). Derecho penal como ultima ratio. Hacia una política criminal racional, Praxis, Talca.
- Chuaqui, B. (2016). El concepto de dignidad en la antigua Roma y después. Estudio de Viktor Pöschel, *Ars Médica, Revista de Estudios Médicos Humanísticos*, Santiago.

Correa, M. (2019). Estudio Crítico de los delitos de Desobediencia, Ataque o Resistencia y Rebelión previstos en el COIP frente al Derecho de Resistencia, Universidad de Cuenca, <https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/33390/4/Trabajo%20de%20Titulacion%20Maestria.pdf>

Cuerda, M. (2003). Los delitos de atentado y resistencia, Valencia, Tirant Lo Blanch.

De Toledo y Ubieto, (1977). El bien jurídico protegido en los capítulos VI y VII del título II del Código Penal, Cuadernos de Política Criminal, Madrid

Diez, J. (2007). La política criminal en la encrucijada, Buenos Aires. Dromi, R. (2006). *La verdad del derecho público: los valores*, en *Ius Et Veritas*, N.º 33, Lim.

García, E. (2009). *Cuestiones de imputación en atentados contra órdenes funcionariales ejecutables: los delitos de resistencia y desobediencia*, en *Actualidad Jurídica*. Lima.

García, J. (2019). El tiempo moderado de la intervención coercitiva del Estado, teoría y realidad constitucional, Madrid.

Hernández, J. (2018). Reforma al principio de oportunidad en base al principio de mínima intervención penal, Universidad Central del Ecuador, <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/17625/1/T-UCE-0013-JUR-004-P.pdf>

- Iglesias, S. (2010). La evolución del concepto de orden público a través de las constituciones españolas hasta 1812, Revista de Derecho UNED, Madrid
- López, D. (1996). El Código Penal de 1995 y la voluntad del legislador (comentario al texto y al debate parlamentario), Madrid: Dykinson
- López-Font, J. (1982). La noción de autoridad en la legislación y la jurisprudencia penal, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, vol. 1, Extremadura
- Lorente, S. (2010). Delitos de atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos y de resistencia y desobediencia, Granada: Universidad de Granada
- Mendoza, F. (2016). Análisis típico del delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, LP, pasión por el derecho, Lima.
- Ossa, J. (2000). *Derecho administrativo sancionador. Hacia una teoría general y una aproximación para su autonomía*, Bogotá: Legis.
- Otiniano, D. (2019). Propuesta de modificación para derogar el inciso 3 del artículo 367 del código penal peruano aplicando del principio de proporcionalidad para adecuar la sanción penal, Universidad Señor de Sipán,
<https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/5765/Otiniano%20Soler%20Dario%20Gabriel.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- Pariona, A. (2018). *Violencia y resistencia contra la autoridad*, Aequitas, Lima.
- Pariona, R. (2017). *Violencia y resistencia contra la autoridad*, Revista Aequitas, Universidad Nacional Mayor de San Mayor, file:///C:/Users/USER/Downloads/15222-Texto%20del%20art%C3%ADculo-52253-1-10-20180924.pdf
- Peña Cabrera R. (2020). *Los delitos cometidos bajo el contexto del COVID – 19*. Lima. Pacífico Editores.
- Peña Cabrera, R. (1988). *Tratado de derecho penal*. Parte general, vol. I, 3.a ed., Lima: AFA.
- Pereira, A. (2016). *Lecciones de teoría constitucional*, Santiago de Compostela: Andavira.
- Ramírez, M. (2016). *La desproporcionalidad de la pena en el delito de violencia contra la autoridad en forma agravada*, Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo.
- Roig, M. (2004). *El delito de atentado*, Pamplona, Aranzadi
- Rojas, F. (2007). *Delitos contra la administración pública*, 4.a ed., Lima, Grijley.
- Ruiz, Y. (2020). *La violencia y resistencia a la autoridad policial en la proporcionalidad de la pena en la ciudad de Chiclayo*, Universidad Señor de Sipán, <https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/6662/>

Ruiz%20Aguilar%20Yessenia%20Grissel.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y



ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALL FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS



SOBRECRIMINALIZACIÓN EN EL DELITO DE VIOLENCIA AGRAVADA A LA AUTORIDAD Y LA NECESIDAD DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE ULTIMA RATIO Y PROPORCIONALIDAD

Estimado (a): Se le solicita su valiosa colaboración para que marque con un aspa el casillero que crea conveniente de acuerdo a su criterio y experiencia profesional, puesto que, mediante esta técnica de recolección de datos, se podrá obtener la información que posteriormente será analizada e incorporada a la investigación con el título descrito líneas arriba.

NOTA: Para cada pregunta se considera la escala de 1 a 5 donde:

1	2	3	4	5
TOTALMENTE EN DESACUERDO	EN DESACUERDO	NO OPINA	DE ACUERDO	TOTALMENTE DE ACUERDO

ITEM	TD	D	NO	A	TA
1.- ¿Cree usted que existe una sobre criminalización en el delito de violencia agravada a la autoridad?					
2.- ¿Se aplica el principio de ultima ratio en el delito de violencia agravada a la autoridad?					
3.- ¿Se aplica el principio de proporcionalidad en el delito de violencia agravada a la autoridad?					
4.- ¿Considera usted se deba aplicar el principio de ultima ratio y proporcionalidad en el delito de violencia agravada a la autoridad?					
5.- ¿Cree usted que considerar que la legislación nacional resulta desproporcionada en función al delito de violencia agravada a la autoridad?					
6.- ¿Considera usted que la sobre criminalización de las conductas típicas ha generado sobrecarga procesal?					

7.- ¿Cree usted, que la doctrina es unánime al señalar que dicha política criminal resulta un despropósito y debe ser seriamente analizada y modificada desde un enfoque de derechos humanos?					
8.- ¿Considera usted que mientras no se modifique la legislación respecto al delito de violencia contra la autoridad y sus agravantes al juez no le quedará más que recurrir a valorar la responsabilidad del autor y el comportamiento de la víctima como alternativa de solución a los problemas de desproporcionalidad de las penas?					
9.- ¿Cree usted que cuando la intervención policial no sigue los procedimientos jurídicos, es decir hay abuso de autoridad no se configura la agravante?					
10.- ¿Considera usted se deba modificar la normativa respecto al tipo penal establecido en el delito de violencia agravada a la autoridad?					